

ORIGEN: SECRETARIA DE GOBIERNO/CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO
DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/CARDENAS PEÑA ILBAYOH
ASUNTO: COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, PARA P
OBS: 20261700121261

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20261700121261

Fecha: 05-03-2026

20261700121261

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

170

Subsecretario:

DAVID GARZÓN FANDIÑO

Comisión Segunda de Gobierno

Concejo de Bogotá, D.C.

comisiondegobierno@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28A - 41

Bogotá, D.C

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Comentarios de la Administración Distrital, para Primer debate del Proyecto de Acuerdo No.016 de 2026.

Respetado Subsecretario:

De conformidad con lo señalado subcapítulo III artículo 459 del Decreto Distrital 642 de 2025, los sectores Seguridad, Convivencia y Justicia (Coordinador); Gestión Jurídica; Movilidad; Gobierno; Integración Social y Hacienda, a través de las entidades correspondientes, elaboraron comentarios para primer debate con relación al proyecto de acuerdo No. 016 de 2026. *“Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá”*.

Con fundamento en los comentarios de carácter jurídico, técnico y presupuestal, emitidos por las entidades mencionadas (ver anexos), la Administración Distrital considera que la iniciativa analizada es no viable.

No obstante, lo anterior, en caso de requerir información adicional sobre el particular, lo invito a comunicarse con la Dirección de Relaciones Políticas, al teléfono 3820660 Ext. 1702.

Cordialmente,




CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO


Director de Relaciones Políticas

carlos.aparicio@gobiernobogota.gov.co

Anexos: Uno (81) folios en formato *.pdf).

Copias: Julián Espinosa Ortiz (Autora), Ana Teresa Bernal Montañez (coordinadora) y María Victoria Vargas Silva

Proyectó: Viviana Turriago Mejía-Profesional Universitaria DRP 

Revisó y Aprobó: Evita del Pilar Ospina Marín. Contratista DRP 



Doctor

CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO
DIRECTOR DE RELACIONES POLÍTICAS
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Correo: carlos.aparicio@gobiernobogota.gov.co
radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co
asuntosnormativosdrp@gobiernobogota.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de Comentarios Proyecto de Acuerdo 016 de 2026 – Rad. No. 1-2026-2818

Respetado doctor Aparicio,

Atendiendo a la solicitud y una vez revisado por el equipo técnico y jurídico de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) el articulado del Proyecto de Acuerdo 016 de 2026 *"Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá"*, el concepto emitido por este despacho es "No Viable".

Cordialmente,

CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Proyectó: Paula Andrea Bermúdez Molina - Contratista Despacho
Revisó: Andrés Mauricio Alvarado Pérez - Enlace Despacho
Anexo: Oficio comentarios Proyecto de Acuerdo 016 de 2026 (4 folios)



FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO

SECTOR QUE CONCEPTÚA: Seguridad, Convivencia y Justicia

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 016 AÑO: 2026 PARA PRIMER DEBATE

TÍTULO DEL PROYECTO.

"Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá."

AUTOR (ES)

H.C. Julián Espinosa Ortiz

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO.

De conformidad con lo establecido en el articulado del proyecto de acuerdo, este tiene por objeto:
"Crear la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá."

COMPETENCIA LEGAL PARA PRESENTAR LA INICIATIVA

ES COMPETENTE

Si x No .

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley, dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

ANÁLISIS JURÍDICO.

De acuerdo con lo sustentando en la exposición de motivos, el proyecto de acuerdo tiene como finalidad establecer lineamientos para la creación de una estrategia que permita luchar contra la receptación de autopartes, celulares, y el mobiliario urbano del Distrito Capital. Lo anterior basado en las competencias establecidas en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

NORMAS CONSTITUCIONALES

- Artículos 1, 2, y 95 de la Constitución Política de Colombia.

NORMAS CON FUERZA DE LEY

- Ley 599 de 2000. "Por la cual se expide el Código Penal.", artículos 327A, 327B y 327C.

- **Ley 1801 de 2016.** *"Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana."*

NORMAS DISTRITALES

- **Acuerdo 079 de 2003.** *"Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá, D.C., para la garantía del derecho a la vida, seguridad, salud, patrimonio económico, libertad e integridad."*
- **Acuerdo 637 de 2016.** *"Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones."*
- **Plan Distrital de Desarrollo- Acuerdo Distrital 927 de 2024** "Bogotá Camina Segura".

Ahora bien, en lo que se relaciona con el contenido de la propuesta de Acuerdo, como norma general de las funciones del Concejo Distrital de Bogotá, el artículo 8 del Decreto Ley 1421 de 1993, indica que *"[e]l Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales"*.

Acerca de las funciones generales de los concejos, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado consideró que:

"Los artículos 313 y 315 constitucionales establecen las competencias de los concejos y los alcaldes respectivamente, y prevén que la misma Constitución y la ley pueden asignarles otras. Su lectura atenta muestra cómo las funciones de los concejos consisten fundamentalmente en establecer, mediante decisiones de carácter general, el marco normativo local, en tanto que las funciones del alcalde son, en su esencia, de ejecución porque su ejercicio requiere actuaciones y decisiones concretas. (...)

En primer término, las decisiones de carácter general que adopta el concejo municipal, denominadas Acuerdos, en algunos casos son de iniciativa privativa del alcalde y, en todos los casos, requieren de su sanción para entrar en vigencia; (...)".

Con respecto a las competencias señaladas en los numerales 1 y 7, la Sección Primera del Consejo de Estado ha señalado que:

*"De manera acorde con este marco general, la Constitución reconoció expresas facultades normativas a los Concejos Municipales en ámbitos cruciales de la vida local. Así, por ejemplo, según el artículo 313 de Constitución Política, les corresponde **reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (numeral 1.º), dictar normas orgánicas del presupuesto (numeral 3.º), reglamentar los usos del suelo (numeral 7.º) o dictar las normas necesarias para***

el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (numeral 9.º). En virtud de estas atribuciones, dado el carácter político administrativo de estas corporaciones, sus decisiones, los acuerdos municipales, tienen el carácter de reglamentos, esto es, actos jurídico administrativos de contenido normativo y, por ende, de carácter general, impersonal y abstracto, cuya fiscalización ha sido confiada a la justicia contencioso administrativa. (...). (Negritas fuera del texto original).

Ahora bien, a pesar del reconocimiento jurisprudencial y positivo anteriormente ilustrado respecto de las competencias generales de los concejos, es menester traer a colación lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-031/95, en la que se dio claridad frente a la competencia discrecional y reglada de estas corporaciones, en los siguientes términos:

*“Puede afirmarse que hay **facultad** o competencia discrecional cuando la autoridad administrativa en presencia de circunstancias de hecho determinadas, es libre (dentro de los límites que fije la ley) de adoptar una u otra decisión; es decir, cuando su conducta no le está determinada previamente por la ley. A contrario sensu, **hay competencia reglada cuando la ley ha previsto que frente a determinadas situaciones de hecho el administrador debe tomar las medidas a él asignadas en forma expresa y sujetarse a las mismas**”* (subrayado fuera de texto).

Con lo anterior, la jurisprudencia constitucional interpretó los límites que corresponde a los concejos, tanto si las decisiones o medidas que adoptan no están previamente fijadas en el ordenamiento, como en el caso de que sí lo estén.

Por ello, el Cabildo Distrital para el presente proyecto de acuerdo debe expedir lineamientos impersonales, abstractos y de orden general sin proceder a interferir en las competencias del Alcalde Mayor las cuales versan sobre el direccionamiento de la acción administrativa en el distrito.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual del objeto del proyecto, la creación de una estrategia que combata el fenómeno de la receptación por iniciativa del Concejo, se constituye bajo los preceptos del tipo penal denominado receptación, el cual se encuentra contemplado en el título X Capítulo Sexto, Delitos contra el orden económico social del Código Penal, artículo 327C así:

*“**Artículo 327C: Receptación.** (Adicionado por la Ley 1028 de 2006) El que sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles descritas en los artículos 327-A y 327-B adquiera, transporte, almacene, conserve, tenga en su poder, venda, ofrezca, financie, suministre o comercialice a cualquier título hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan debidamente reglamentadas o sistemas de identificación legalmente autorizados, cuando tales bienes provengan de la ejecución de alguno de estos delitos, incurrirá en prisión de*

seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que destine mueble o inmueble o autorice o tolere en ellos tal destinación o realice cualquier actividad que facilite la comisión de las conductas mencionadas en el inciso anterior.!

En tal sentido, la propuesta realizada desde el Concejo de Bogotá difiere del fenómeno mencionado en el artículo 327C con el cual justifica un combate contra la receptación, redirigida al desincentivo del hurto de autopartes, celulares y mobiliario; sin que el mismo coincida con el fundamento legal que expresa la ley para los hidrocarburos. En ese sentido, no hay una conexión entre la argumentación establecida en la exposición de motivos y el fundamento legal aducido para sustentar el presente proyecto de acuerdo.

Ahora bien, verificado el epígrafe y las competencias propuestas por el Concejo de Bogotá D.C. para la presentación del proyecto de acuerdo analizado, conforme al numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, no resulta viable la redacción presentada en los artículos 2, y 3 toda vez que de la manera como se redactó la iniciativa, supone con el acuerdo la creación implícita de una estrategia, definiendo los elementos discrecionales que podría o no considerar la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), y asigna funciones adicionales tanto a la Secretaría mencionada como a la Secretaría de Distrital de Gobierno por intermedio de las alcaldías locales para la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control.

En tal sentido, cabe verificar que el contenido de la propuesta realizada desde el Concejo de Bogotá, difiere con la expedición de lineamientos, pues de conformidad con el contenido expresado en los artículos 2 y 3, de la propuesta normativa, atribuye, entre otras, funciones específicas a la SDSCJ, las cuales desbordan el marco de sus competencias establecidas de conformidad al Decreto Distrital 413 de 2016; y se traducen en acciones concretas, tales como: (i) la priorización de zonas de vigilancia, y (ii) acciones de control del resorte de entidades del orden nacional y territorial.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) es la entidad encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presume han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro. Así, el Decreto Ley 016 de 2014, modificado por Decreto Ley 898 de 2017, "Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación", señala la estructura organizacional de la entidad, y los distintos protocolos para la atención integral del ciudadano, dentro de los cuales se encuentran: (i) el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV); (ii) los Centros de Atención a Víctimas (CAV), (iii) la Unidad de Reacción Inmediata (URI), (iv) la Unidad de Conciliación Pre Procesal (UCP), (v) los Puntos de Recepción de Denuncias, entre otros, cuyos objetivos son brindar una atención integral con enfoque diferencial a cualquier víctima de un hecho delictivo, promover la articulación interinstitucional en relación con el restablecimiento de derechos de la población, hacer más eficientes los procesos de recepción y clasificación de denuncias; y fortalecer la confianza de la comunidad hacia la institución al unificar en un solo espacio la atención por parte de la FGN.

También contribuyen a evitar fenómenos de re-victimización, y se materializan los principios de la

atención integral con enfoques diferenciales, bajo una perspectiva de goce efectivo de derechos¹.

Es de resaltar, que dentro de las acciones a ejecutar para la mejora y continuo seguimiento de la seguridad, se implementó la Resolución expedida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, No 226 de 2022, *"Por medio de la cual se emiten lineamientos para la implementación y reglamentación de las Redes de Cuidado y del Sello CUIDAdano"*, de forma coordinada con la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la cual, se definió y reglamentó el funcionamiento de las redes de cuidado, así como sus tipologías, rutas de creación, conformación e implementación.

Así pues, a la luz de sus artículos 10 y 11 de la Resolución citada, se promueven mecanismos y acciones concretas desarrolladas a través de la SDSCJ, con el fin de generar un mayor fortalecimiento a este tipo de redes, así como los beneficios y registros.

Igualmente, el Distrito Capital, ha ido más allá y ha promovido el Sistema Distrital de Cuidado, a través de las denominadas "manzanas del cuidado", estableciendo criterios operativos para formular mejores estrategias alrededor del cuidado y de los beneficios a los modelos de operación alrededor de estas redes, desarrolladas actualmente conforme a los Decretos Distritales 415 y 427 de 2023.

Es de manifestar que, lo citado por el concejo respecto a la redacción propuesta resulta en una imprecisión frente a las competencias y misionalidad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, pues de conformidad con el artículo segundo del Decreto Distrital 413 de 2016, su objeto es el de *"Orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia"*. Igualmente, como parte de la estrategia AIDE, se ha desarrollado un componente de direccionamiento, a fin de que en el marco del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", se generen acciones de relevancia para la prevención del delito.

Por lo anterior, respetuosamente se sugiere al concejo, dé claridad a las funciones gestionadas por este despacho relacionadas a su objeto y misión, sin que se pueda generar una asignación adicional de funciones que pueda desbordar las competencias establecidas en el Decreto Ley 1421 de 1993.

En relación con el apoyo para la denuncia de distintos delitos, las Casas de Justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, brindan apoyo y redireccionamiento para que la población vulnerable y/o afectada por la ocurrencia de algún hecho delictivo, pueda concurrir ante las entidades y canales competentes para la presentación de denuncias, y de esta manera, se gestionen los apoyos necesarios para su atención integral.

Finalmente, en lo que se relaciona con los artículos 4, 5 y 6, es menester manifestar que para la creación de una mesa intersectorial contra la receptación, debe observarse lo previsto en los artículos 7 y 8 del Decreto Distrital 547 de 2016², en tanto que su naturaleza implícita es la de una instancia de coordinación.

El mencionado artículo 7, dispone *"Los temas que en adelante deban surtir un proceso de coordinación"*

¹Portafolio de servicios institucionales publicado por la Fiscalía General de la Nación- <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/portafolio-de-servicios-institucionales-Fiscalia/CC%81a-General-de-la-Nacio%CC%81n-PUBLICADO.pdf>

²Decreto Distrital 547 de 2016: *Por medio del cual se fusionan y reorganizan las Instancias de Coordinación con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Alcalde Mayor de Bogotá por el artículo 118 del Acuerdo 645 de 2016, y se dictan otras disposiciones*

deberán tratarse en los espacios existentes, evitando la creación de nuevas instancias de coordinación. La creación de nuevas instancias de coordinación deberá contar con la aprobación previa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Planeación, cuyo trámite deberá ser gestionado por el sector administrativo interesado mediante solicitud que contenga la justificación técnica y jurídica.”, lo que para el caso en estudio, significaría que el sector administrativo interesado, que en gracia de discusión podría ser esta Secretaría, es quien debe gestionar el trámite solicitando la aprobación de dicha mesa, por parte de la Secretaría General y de Planeación del Distrito, no sin antes justificar técnica y jurídicamente su solicitud.

Por lo anterior, en consideración a los artículos 4, 5 y 6 del proyecto de acuerdo 016 de 2026, se hace necesario traer a colación el fallo judicial del tribunal administrativo de Cundinamarca- Sección Primera-Subsección A, con relación al fallo 01086 de 2019, mediante el cual se acogieron las objeciones de la Administración Distrital, con relación al proyecto de acuerdo 136 de 2018 *“por medio del cual se crea la mesa distrital de seguimiento al sistema de salud en Bogotá”*. Sobre el particular procedió a calificar la competencia del Concejo para la expedición del proyecto de acuerdo mencionado en los siguientes términos:

“(…) para la sala no hay duda que el Consejo de Bogotá no tiene la competencia funcional, para presentar iniciativas que promuevan la reglamentación de la estructura administrativa del distrito, como la que se pretende en el proyecto de acuerdo 136 de 2018 “por medio del cual se crea la mesa distrital de seguimiento al sistema de salud en Bogotá”

*Tal como se puede observar el artículo 313-6 de la Constitución política en armonía con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, y el Decreto 1421 de 1993, señalan que corresponderá a la corporación de elección popular la determinación de la estructura administrativa, **sin embargo, su iniciativa corresponderá exclusivamente al alcalde.***

Lo cierto es que de acuerdo con lo señalado en los artículos 12- 8 y 13 del Decreto 1421 de 1993, los proyectos de acuerdo que pretendan determinar la estructura administrativa del distrito capital, sólo podrán presentarse por iniciativa del alcalde Mayor de Bogotá. Como claramente está establecido que el alcalde distrital no tu hubo iniciativa alguna en la proposición y aprobación del proyecto de acuerdo para la creación de la mesa distrital de seguimiento al sistema de salud en Bogotá, la objeción prosperará”. (Negrilla y subraya fuera del texto).

Por tanto, la creación de una mesa intersectorial para combatir el fenómeno de la receptación en el Distrito Capital, se traduce en una modificación de la estructura administrativa, lo cual en virtud de lo establecido en el artículo 13, es iniciativa exclusiva del Alcalde Mayor; por lo anterior, se recomienda respetuosamente retirar este contenido del texto integral del proyecto de acuerdo 016 de 2026.

En consecuencia, si bien el Concejo de Bogotá tiene competencia de conformidad con el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, de la manera como está planteada la iniciativa, no resulta viable la creación de una estrategia para combatir el fenómeno de la receptación en los términos expuestos, incluyendo la formulación de una instancia de coordinación, teniendo en cuenta que la

asignación de funciones adicionales, y la modificación de la estructura de la administración, debe estar acompañada de una iniciativa del Alcalde Mayor, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 13 y en los numerales 1, 3 y 6 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993.

Concepto Jurídico: No viable.

ANÁLISIS TÉCNICO

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo Distrital No. 637 de 2016, en coordinación con las entidades competentes, implementa programas y estrategias de prevención y control del delito y de comportamientos contrarios a la convivencia, así como a la mitigación de los factores de riesgo asociados a los hechos que afectan la seguridad y convivencia de la ciudadanía.

En ese sentido, esta Secretaría, en el marco de sus competencias misionales, cuenta con la facultad para emitir conceptos técnicos respecto del proyecto de acuerdo en mención, el cual propone crear la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá.

El proyecto de acuerdo establece, en el artículo 1, la creación de una estrategia conjunta por parte de la SDSCJ y la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG). Asimismo, define los términos, "autopartes", "celular", "mobiliario urbano" y "mobiliario de servicios públicos".

Los artículos 2 y 3 precisan las responsabilidades institucionales de la SDSCJ, la SDG, las alcaldías locales, las estaciones de policía y las unidades de investigación judicial, en el marco de la mencionada estrategia.

Finalmente, los artículos 4 y 5 contemplan la creación de una mesa local intersectorial contra la receptación.

Sobre la propuesta normativa antes reseñada, esta Secretaría presenta las siguientes observaciones:

1. En relación con la priorización de zonas de riesgo contemplada en el proyecto de acuerdo, la SDSCJ, mediante la línea estratégica "*Distritos Seguros*", "*Control Urbano*" y "*Lucha contra el Crimen*", del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) vigente, ya implementa acciones orientadas a dar cumplimiento a dicha directriz.
2. Por otro lado, la propuesta del articulado riñe con la línea estratégica que formuló y viene implementando esta Secretaría, en la que se busca hacer levantamiento de información, planeación operativa y seguimiento de resultados, con el objetivo transversal de reducir todo tipo de riesgos que se puedan presentar en esas fases del proceso. Parte de esa reducción de riesgos implica el trabajo hermético con unidades especializadas de la Policía Nacional.
3. En cuanto a la creación de mesas de trabajo, se precisa que el Consejo Distrital de Seguridad y los Consejos Locales de Seguridad son las instancias actualmente vigentes, a través de las cuales se

coordinan acciones interinstitucionales para la identificación y abordaje de situaciones que afectan la seguridad y la convivencia en los territorios.

4. Durante la vigencia 2024, el presente proyecto fue radicado mediante el proyecto de acuerdo 020 de 2024, frente al cual esta Entidad emitió un concepto de no viabilidad.

Con base en lo anterior, esta Secretaría concluye que el proyecto de acuerdo presentado no cuenta con viabilidad, toda vez que ya fue objeto de evaluación mediante un concepto desfavorable sobre el mismo articulado, cuyo contenido se encuentra incorporado en las estrategias actualmente en ejecución en el marco del PISCCJ vigente.

Concepto técnico: No viable.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO.

Se reiteran los comentarios jurídicos y los comentarios técnicos expuestos en el presente concepto.

¿GENERA GASTOS ADICIONALES?

Si ____ No x

VALORACIÓN DEL GASTO





Si ____ No x

VIABILIDAD DEL PROYECTO.

VIABLE ____ VIABLE CONDICIONADO ____ NO VIABLE x

Cordialmente,


CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Aprobó: Ana María Moreno García – Directora Jurídica y Contractual 
Alberto Sánchez Galeano- Subsecretario de Seguridad y Convivencia 
Consolidó: Paula Andrea Bermúdez Molina - Contratista Despacho 
Revisó: Andrés Mauricio Alvarado Pérez – Enlace Despacho 

2310460

Bogotá D.C.

Señor(a):

CARLOS ALBERTO APARICIO PATINO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO - SDG

Dirección Electrónica: radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co

BOGOTÁ, D.C. -

Asunto: Pronunciamiento para primer debate al proyecto de acuerdo 16 de 2026. (Su radicado 20261700026341)**Referenciado:** 1-2026-908

Respetado director:

Esta secretaría recibió el oficio del asunto, en el que solicita la emisión de pronunciamento para primer debate al proyecto de acuerdo 16 de 2026 *“Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá”*, sin que se haya designado como coordinador a la misma.

Una vez analizada la iniciativa presentada, se estableció que su estructura y contenido guarda identidad con los proyectos de acuerdo 648 y 1018 de 2025, del que este sector ha emitido pronunciamientos con los radicados 2-2025-9474 del 14 de agosto de 2025 y 2-2025-16445 del 09 de diciembre de 2025. En ese sentido, se ratifican dichos comentarios que por este escrito se adjuntan.

Atentamente,

**ANDRES FELIPE PUENTES DIAZ****DIRECTOR DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS**

Copia:

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - ANA MARIA CADENA - radicacionhaciendabogota@shd.gov.co

Anexos Electrónicos: 1

Proyectó: DANIEL YIDID GRANADOS GELVES-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS

Revisó: ANDRES FELIPE PUENTES DIAZ-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS |

Página número 1 de 2

Documento Electrónico: 887dcff0-b3f2-4519-acec-8fadd0e450a5

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

2311520-FT-019 Versión 02



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Jurídica Distrital

Nro. Rad: **2-2026-1443**

Fecha: **02/02/2026 05:09:35 PM**

Origen: DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y
A

Aprobó: ANDRES FELIPE PUENTES DIAZ-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS

Página número 2 de 2

Documento Electrónico: 887dcff0-b3f2-4519-acec-8fadd0e450a5

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2311520-FT-019 Versión 02

2310460

Bogotá D.C.

Señor(a):

CARLOS ALBERTO APARICIO PATINO.

SECRETARIA DE GOBIERNO

Dirección Electrónica: radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co

BOGOTÁ, D.C. -

Asunto: Pronunciamiento para primer debate al proyecto de acuerdo 1018 de 2025. (Su radicado 20251700535791)

Referenciado: 1-2025-19642

Respetado director:

Esta secretaría recibió el oficio del asunto, en el que solicita la emisión de pronunciamento para primer debate al proyecto de acuerdo 1018 de 2025 *“Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá”*, sin que se haya designado como coordinador a la misma.

Una vez analizada la iniciativa presentada, se estableció que su estructura y contenido guarda identidad con el proyecto de acuerdo 648 de 2025, del que este sector ha emitido pronunciamento con el radicado 2-2025-9474 del 14 de agosto de 2025. En ese sentido, se ratifican dichos comentarios que por este escrito se adjuntan.

Precisamente, el proyecto del asunto deriva de una solicitud de desarchivo del proyecto de acuerdo 648 de 2025, en los términos del párrafo del artículo 79 del Acuerdo 741 de 2019¹, modificado por el artículo 41 del Acuerdo 1014 de 2025, que señala:

“(…)Parágrafo. Los proyectos de acuerdo archivados al término de un periodo de sesiones ordinarias por no ser discutidos en primer debate, se entenderán presentados en el (los) siguiente(s) periodo(s), de la respectiva vigencia anual, mediante solicitud escrita dirigida a la Secretaría General por parte del autor principal. Al proyecto no se le podrá modificar el articulado original y conservará los mismos ponentes, salvo renuncia expresa o impedimento. Recibida la solicitud, la Secretaría General adelantará el trámite interno para el desarchivo del expediente, lo publicará en la red interna y en los anales del Concejo, y lo remitirá a la Comisión de origen para su reanudación. Una vez remitido el proyecto a la

¹ Reglamento Interno del Concejo

comisión y comunicado a los ponentes, estos podrán solicitar el desarchivo de la ponencia o rendirla en los términos del artículo 71 del presente reglamento.”

Atentamente,



ANDRES FELIPE PUENTES DIAZ
DIRECTOR DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS

Copia:

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - ANA MARIA CADENA - radicacionhaciendabogota@shd.gov.co

Anexos Electrónicos: 1

Proyectó: DANIEL YIDID GRANADOS GELVES-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS

Revisó: ANDRES FELIPE PUENTES DIAZ-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS |

Aprobó: ANDRES FELIPE PUENTES DIAZ-DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS



Rad. No.: 2-2025-9474

Fecha: 14/08/2025 15:11:42

Destino: DIRECTOR DE RELACIONES
POLÍTICAS - SECRETARÍA

Copia: 3

Anexos: 6 FOLIOS



2310460

Bogotá, D. C.,

Doctor

JUAN BELLO GONZÁLEZ

Director de Relaciones Políticas

Secretaría Distrital de Gobierno

Calle 11 No. 8 - 17

Ciudad

ASUNTO: Pronunciamiento para primer debate al Proyecto de Acuerdo 648 de 2025.

Referenciado: 20251700339301. Radicado SJD No. 1-2025-12858.

Respetado director:

Esta secretaría recibió el oficio del asunto, en el que solicita la emisión de pronunciamiento para primer debate al proyecto de acuerdo 648 de 2025 *"Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá"*, sin que se haya designado como coordinador a la misma.

Al respecto, se realizó el pronunciamiento requerido en el formato establecido para el efecto, el cual se adjunta al presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Decreto Distrital 438 de 2019.

Atentamente,



ANDRÉS FELIPE PUENTES DÍAZ

Director Distrital De Doctrina y Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica Distrital

C.C Dra. Ana María Cadena Ruiz, Secretaria Distrital de Hacienda, carrera 30 No. 25-90 Bogotá

D.C correo institucional: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co

Anexos: Copia del pronunciamiento en seis (6) folios.

Proyectó: Daniel Granados – Profesional Especializado - Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos

Revisó: Andrés Felipe Puentes Díaz – Director Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos

Aprobó: Andrés Felipe Puentes Díaz – Director Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO

SECTOR QUE CONCEPTÚA: Gestión Jurídica.

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 648 **AÑO:** 2025

"Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá"

AUTOR (ES)

H.C. JULIAN ESPINOSA ORTIZ – Partido Alianza Verde

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

De conformidad con lo expuesto en la exposición de motivos y atendiendo el título que lleva este proyecto, su objeto consiste en *"crear la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá."*

COMPETENCIA LEGAL PARA PRESENTAR LA INICIATIVA

ES COMPETENTE

SI ☐ NO ☒

El Concejo Distrital NO tiene competencia para dictar los contenidos propuestos en el proyecto de acuerdo 648 de 2025, conforme a la argumentación jurídica realizada en el presente documento.

ANÁLISIS JURÍDICO

En cumplimiento del artículo 17 del Decreto Distrital 438 de 2019, *"Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones"*, se procede a realizar el análisis jurídico al proyecto de acuerdo

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2310460-FT-087 Versión 01

desde el punto de vista constitucional y legal, descartando cualquier análisis de inconveniencia¹ que pudiera contener el acuerdo en sí mismo y que escapen al análisis realizado. En ese orden de ideas, el análisis al Proyecto de Acuerdo 648 de 2025 se dividirá en 3 acápites: i) Contexto constitucional que enmarca la temática del proyecto de acuerdo. ii) Competencias del Concejo Distrital para presentar y aprobar el proyecto de acuerdo y análisis concreto sobre el articulado del proyecto de acuerdo y iii) Conclusiones.

i) Contexto jurisprudencial que enmarca la temática del proyecto de acuerdo.

El proyecto de acuerdo, en esencia, pretende crear la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá (**Art. 1 del proyecto**), con unos elementos constitutivos y ordenes específicas (**Art. 2 y 3 del proyecto**) y, creando una mesa intersectorial local contra la receptación, a la cual se le asignan unas funciones y unos integrantes (**Art. 4,5 y 6 del proyecto**).

Pues bien, la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano como formas de materializar el delito de receptación (Art. 447 Código Penal), indudablemente como fenómeno social criminal requiere de su abordaje por estrategias, políticas, planes, programas y proyectos para su no ocurrencia, dirigidos a garantizar la convivencia y la preservación del orden público en la ciudad, es decir, también hacen parte de la garantía de la seguridad en su entendimiento más amplio.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que *“la seguridad fue visualizada en la Constitución bajo tres manifestaciones: (i) como un valor y una finalidad del Estado que permean la totalidad del texto constitucional, (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un derecho individual, derivado -entre otras- de las garantías previstas en la Carta contra los riesgos extraordinarios a los que se pueden ver sujetas.”*²

Las mencionadas manifestaciones de la seguridad y siguiendo la sentencia C-555 de 2017, puede ser descritas así:

-Como un valor y una finalidad del Estado: Las instituciones que velan por crear condiciones de seguridad tienen como objetivo proteger a todas las personas residentes en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Es decir, la salvaguardia de la seguridad general constituye una de las razones que justifica la existencia misma del Estado (Art. 2 C.P.).

¹ En relación con las objeciones por inconveniencia, también aplicables a nivel territorial por parte del Alcalde Distrital a los proyectos de Acuerdo del Concejo Distrital, ha expresado la Corte Constitucional en Sentencia C-634 de 2015 con ponencia del Mg. Mauricio González Cuervo que: *“En efecto, la formulación de objeciones por inconveniencia ... puede tener razones de orden económico, social y político para oponerse a ciertos proyectos ...”*

² Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-555 del 30 de agosto de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucera Mayolo.

-Como derecho colectivo: Como un derecho que asiste en forma general a los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social. (Art. 88 C.P.).

-Como derecho individual: Es aquel que faculta a las personas para recibir protección adecuada por las autoridades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de soportar por rebasar los niveles tolerables de peligro implícitos de la vida en sociedad.

En ese contexto, resulta procedente establecer los alcances y límites (competencias) del Concejo Distrital y la Administración Distrital en cabeza del Alcalde Distrital, en torno a la temática abordada en el proyecto de acuerdo.

ii) **Competencias del Concejo Distrital para presentar y aprobar el proyecto de acuerdo y análisis concreto sobre el articulado del proyecto de acuerdo**

El artículo 313 de la Carta, atribuye a los concejos municipales, entre otras funciones: “1. *Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio*”.

En cuanto al Concejo Distrital de Bogotá, el Decreto Ley 1421 de 1993 “*Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá*”, establece en el artículo 8 que: “*El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales*”.

El artículo 12 del Decreto Ley en comento, establece que es atribución del Concejo Distrital, entre otras, de conformidad con la Constitución y a la ley, la de: “1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; (...)*”.

En cuanto a las funciones de carácter normativo atribuidas a los Concejos municipales y distritales, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“De manera acorde con su papel de “entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado” (artículo 311 de la Constitución) y con la atribución de importantes responsabilidades en materia de promoción del progreso local, la ordenación del territorio, la prestación de servicios públicos y el mejoramiento cultural y social de su comunidad, el Constituyente reconoció a los municipios, y en especial a los concejos municipales, una importante facultad normativa. Ella no solo resulta inherente a la garantía institucional de la autonomía local en el marco de la Constitución y la ley consagrada por el artículo 287 de la Carta; representa además una herramienta clave para el cumplimiento de las diferentes funciones que les han sido confiadas por el ordenamiento jurídico.”

Así, en el contexto de la unidad de la ley propia del principio unitario con reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales sancionado por el artículo 1° del Texto Constitucional, la garantía de la autonomía local exige al legislador el respeto de un margen mínimo para el desarrollo de los aspectos particulares o propios de cada entidad que puedan resultar relevantes para el ejercicio de las competencias que le han sido encomendadas y la gestión autónoma de sus propios intereses. Esto, habida consideración que “el reconocimiento de la diversidad hecho a través de la consagración del principio de autonomía, lleva necesariamente al respeto del núcleo esencial de ésta, pues no puede darse un tratamiento idéntico, a través de regulaciones generales, unificadas y homogéneas, a localidades y territorios indígenas con características muy distintas y con derecho de participar a través de sus propios órganos en la administración de sus propios asuntos.

(...) la Constitución reconoció expresas facultades normativas a los Concejos Municipales en ámbitos cruciales de la vida local. Así, por ejemplo, según el artículo 313 de Constitución Política, les corresponde reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (numeral 1.º), dictar normas orgánicas del presupuesto (numeral 3.º), reglamentar los usos del suelo (numeral 7.º) o dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (numeral 9.º). En virtud de estas atribuciones, dado el carácter político administrativo de estas corporaciones, sus decisiones, los acuerdos municipales, tienen el carácter de reglamentos, esto es, actos jurídico administrativos de contenido normativo y, por ende, de carácter general, impersonal y abstracto, cuya fiscalización ha sido confiada a la justicia contencioso administrativa.

Ahora bien, como es natural en un Estado de Derecho como el sancionado por el artículo 1 de la Constitución, los poderes normativos reconocidos a los entes locales en general y a los concejos municipales en particular no pueden ser ejercidos de cualquier modo ni tener cualquier contenido. Su ejercicio debe supeditarse a los procedimientos fijados en la ley y sus contenidos deben respetar las disposiciones de la Constitución y la ley que le sirven de marco. Y como sucede con cualquier acto jurídico público, su validez está supeditada a que el órgano que lo expide tenga competencia para adoptar esa determinación. En tanto que presupuesto de validez de los actos administrativos o de los reglamentos, la competencia ha sido entendida por la jurisprudencia de esta Sala de Decisión como “la aptitud o autorización que tiene todo funcionario u organismo estatal para ejercer las funciones y la autoridad que le han sido asignadas, dentro de circunstancias objetivas y subjetivas señaladas en la Constitución, la ley o el reglamento, y sólo dentro de ellas (...)”³.

En cuanto a la diferencia de las funciones normativas a cargo de los concejos municipales y distritales con las funciones administrativas a cargo de los alcaldes, el Consejo de Estado ha precisado que: “Los artículos 313 y 315 constitucionales establecen las competencias de los concejos y los alcaldes respectivamente, y prevén que la misma Constitución y la ley pueden

³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala. Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Rad. No. 25000-23-24-000-2007-90177-01.

Sobre la peculiar naturaleza político administrativa de los concejos municipales, que forman parte esencial de la Administración Pública local, pero no conforman el ejecutivo municipal subordinado al alcalde, véase, de esta Sala de Decisión, la sentencia de 1 de agosto de 2016, Rad. No. 11001 03 15 000 2016 00767 00. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

asignarles otras. Su lectura atenta muestra cómo las funciones de los concejos consisten fundamentalmente en establecer, mediante decisiones de carácter general, el marco normativo local, en tanto que las funciones del alcalde son, en su esencia, de ejecución porque su ejercicio requiere actuaciones y decisiones concretas.⁴ (Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, en principio podría entenderse que el Concejo Distrital tendría la facultad para presentar el proyecto de acuerdo dado su contenido, relacionado con la búsqueda de mayor seguridad a los habitantes del Distrito Capital (**Artículos 1,2,3 del proyecto**). No obstante, el inciso 2° del artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993, fija específicas atribuciones al Alcalde Mayor como primera autoridad de policía en la ciudad, para que, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, dicte los reglamentos, imparta las órdenes, y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas; razón por la cual sería ajena a las competencias del Concejo Distrital la expedición del articulado propuesto, dada su especificidad, concreción y finalidad del mismo, que por demás, impiden su ejecución por parte de la administración de manera dinámica, es decir, a partir de la posibilidad de elegir las opciones y herramientas que considere oportunas, idóneas, razonables y suficientes para su materialización. (Por ejemplo, nótese el grado de concreción de los artículos 2 y 3 del proyecto de acuerdo)

En ese sentido, los proyectos de acuerdo deben regular de manera general, impersonal y abstracta la forma en que se prestarán los servicios y se cumplirán las funciones a cargo del distrito. Sin embargo, como el contenido del articulado del proyecto de acuerdo son tan específicos y detallados, invade competencias otorgadas legal y constitucionalmente al alcalde mayor como el gestor de la acción administrativa y como la primera autoridad en materia de policía del distrito.

En esencia, los presupuestos del proyecto en relación con el valor de la seguridad en la jurisdicción del Distrito Capital, están enfocados a contribuir en la prevención y acción inmediata de las autoridades, ante comportamientos con relevancia policiva o penal que pongan en riesgo bienes jurídicos tutelados asociadas a delitos principales (hurto, extorsión) y la receptación como derivado de estas conductas, en la lógica predominante de las relaciones urbanas.

Sin embargo, en este escenario ligado estrechamente con el manejo del orden público⁵, recae en su ejecución y responsabilidad directamente en el Alcalde Mayor. Al respecto, la Ley 136

⁴ Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. William Zambrano Cetina, Concepto de 05 de junio de 2008. Rad. No. 11001- 03-06-000-2008-00022-00 ((889).

⁵ La Corte Constitucional en Sentencia C-128 de 2018 ha definido el concepto indeterminado de orden público como el: "Conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos, debe completarse con el medio ambiente sano, como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana."

de 1994⁶ y la Ley 1801 de 2016⁷ expresan, la primera como función del Alcalde, entre otras, de promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito. (Numeral 3, artículo 91) y; la segunda, la obligación del Alcalde de elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del primer año de Gobierno, en el marco de las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional, y del plan de desarrollo territorial. (Numeral 4, artículo 205), en este último escenario, el proyecto de acuerdo no está articulado con dicho plan.

En ese sentido, nótese además, como en el Distrito Capital a partir del Acuerdo 637 de 2016⁸ se creó el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia y su respectiva secretaría de despacho. El sector tiene como misión, conforme al artículo 2 del citado acuerdo: *"(...) liderar, planear y orientar la formulación, la adopción, la ejecución, la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas, los planes, los programas y proyectos, las acciones y las estrategias en materia de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a la justicia, orden público, prevención del delito, las contravenciones y conflictividades, y la coordinación de los servicios de emergencias en el Distrito Capital en el marco del primer respondiente."* (Subrayado fuera de texto)

A su turno, conforme el artículo 4° del mismo acuerdo, el objeto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia es el siguiente:

"(...) orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los sectores administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C.(...)"

Igualmente, el artículo 3° del Decreto Distrital 413 de 2016,⁹ en desarrollo del precitado acuerdo, establece como función básica de la Secretaría:

"(...) b. Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad ciudadana y el orden público con las instituciones, entidades y organismos de seguridad del nivel territorial y Nacional. (...)"

"(...) c. Liderar, orientar y coordinar con las entidades distritales competentes, el diseño, la

⁶ "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios."

⁷ "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana".

⁸ "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones."

⁹ "Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones"

formulación, la adopción y la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de prevención y cultura ciudadana que promuevan la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el cumplimiento de la ley. (...)

(...) s. Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y acceso a la justicia trazadas por la Alcaldía Mayor y ejecutadas por las entidades y organismos distritales y las Alcaldías Locales. (...)"

Finalmente, en ese contexto conviene advertir que el actual plan de desarrollo de la ciudad "Bogotá Camina Segura", plantea estrategias en el marco del objeto del proyecto, como puede verse en el programa 3 del objetivo estratégico "Bogotá avanza en seguridad" del artículo 8, que señala:

"8.3. Programa 3. Desmantelamiento de estructuras criminales y delincuenciales con mejores capacidades y activos tecnológicos. Para lograr el debilitamiento del crimen organizado y el desmantelamiento de las estructuras criminales, Bogotá demanda una postura anticipatoria de los organismos de seguridad y justicia frente a su evolución, arraigo y desempeño. Por ello, este programa implementará esfuerzos para la documentación de dinámicas del crimen, identificación de estructuras criminales y delincuenciales, desarrollo de capacidades para su desmantelamiento y estrategias dirigidas al cierre de espacios que permitan su supervivencia. Como parte de este programa se implementarán acciones encaminadas a mitigar el mercado de estructuras criminales de hurto a celulares para el control del delito de receptación, incluyendo el énfasis de inteligencia y persecución criminal en cuanto a las rentas criminales y el lavado de activos, en coordinación con los organismos policiales, militares y judiciales dentro del marco de sus competencias. Además, el programa reconoce que, mediante el hecho metropolitano, toda la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca debe coordinar y aunar esfuerzos para combatir las estructuras criminales. (...)" (Resaltado es nuestro)

Así mismo, el inciso final del artículo 24 del plan, sobre el enfoque de lucha contra la criminalidad establece:

"(...) Por otro lado, en función de afectar estructuras criminales se deberán diseñar e implementar acciones encaminadas a mitigar el mercado de estructuras criminales de hurto a celulares para el control del delito de receptación." (Resaltado es nuestro)

En consecuencia, anticipando la falta de competencia del Concejo Distrital para la presentación del proyecto de acuerdo, resulta oportuno concretar, a partir de los 5 artículos propuestos, el porqué de la anterior conclusión, así:

Artículo 1º

Si bien habla de crear una estrategia en el tema del proyecto de acuerdo, de entenderse el mandato como una orden de generación de la misma a la administración distrital, este ya existe de manera general y abstracta, como se describió anteriormente en la normativa que frente al tema rige en el Distrito Capital.

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Ahora bien, frente a los párrafos propuestos del mencionado artículo que consagra una serie de definiciones, las mismas resultan innecesarias dada la mayor amplitud de protección del bien jurídico tutelado en el delito de receptación (Art. 447 Código Penal), pero además porque sus palabras que están en el objeto deben entenderse en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. (Art. 28 Ley 57 de 1887)

Artículos 2 y 3°

Estos artículos dada su especificidad y concreción sobre el que hacer y cómo hacer de la administración (mandato de priorización de zonas geográficas, según criterios de riesgo o comercio; mandato sobre detalle de lista de establecimiento de comercio; mandato sobre repositorio de operativos IVC para hacer seguimiento a medidas correctivas aplicadas; mandato de control conjunto y su periodicidad a establecimientos de comercio y de registro a vehículos, dispositivos y otros; mandato sobre articulación de acciones y su periodicidad con entes de investigación), claramente invaden el ejercicio de la acción administrativa del Alcalde Mayor en los temas de orden público y garantía de la seguridad, de los cuales corresponde a él la toma de decisiones.

Recuérdese que, conforme el numeral 3 del artículo 38 del DL 1421 de 1993, es atribución del Alcalde dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito. Además, conforme al inciso 2 del artículo 35 de este mismo decreto, como primera autoridad de policía en la ciudad, el alcalde mayor dictará, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas.

Artículo 4,5 y 6°

Frente a estos artículos, y conforme la normativa anotada a lo largo del documento que frente al tema rige en el distrito, además de las competencias del Alcalde Mayor en materia de seguridad y orden público, claramente pretender la creación, conformación y funciones de una mesa intersectorial local contra la receptación, requiere de la iniciativa de la administración.

Lo anterior tiene sustento en pronunciamientos judiciales en los que se ha analizado por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la legalidad de los acuerdos expedidos por el Concejo de Bogotá en los que se dispone la creación de comités, juntas, organismos, instancias, dependencias o niveles permanentes al interior de la organización del Distrito sin que medie la iniciativa de la Alcaldía Distrital, en los siguientes términos:

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

"De la Constitución política y de las normas referidas se desprende que al órgano de elección popular distrital le corresponde la fijación de la estructura administrativa, sin embargo, tal iniciativa se la reservará el gobierno municipal o distrital.

Así las cosas, para la Sala no hay duda que el Concejo de Bogotá no tiene competencia funcional, para presentar iniciativas que promuevan la reglamentación de la estructura administrativa del Distrito, como la que se pretende con el proyecto de Acuerdo No. 136 de 2018 "Por medio del cual se crea la Mesa Distrital de Seguimiento al Sistema de Salud en Bogotá". (Subrayado Nuestro).

Como se puede observar, el artículo 313-6 de la Constitución Política en armonía con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994 y el Decreto 1421 de 1993, señalan que corresponderá a la Corporación de elección popular la determinación de la estructura administrativa, Sin embargo, su iniciativa corresponderá exclusivamente al Alcalde.

Lo cierto es que de acuerdo con lo señalado en los artículos 12-8 y 13 del Decreto 1421 de 1993, los proyectos de Acuerdo que pretendan determinar la estructura administrativa del Distrito Capital, solo podrán presentarse por iniciativa del Alcalde Mayor de Bogotá".

En efecto, el Concejo Distrital no tiene iniciativa para presentar el proyecto de acuerdo en este aspecto, pues dicha mesa hace parte de la administración distrital, por consiguiente, conforme al artículo 13 en concordancia con el numeral 8 del artículo 12, ambos del DL 1421 de 1993, para determinar o reformar la estructura general de la Administración Central debe contar con iniciativa del alcalde mayor.

Precisamente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con ponencia del C.P. Germán Alberto Bula Escobar DEL treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019) radicación número: 11001-03-06-000-2019-00051-00(2416), contesto los siguientes interrogantes así:

1. ¿Es competente el Concejo de Bogotá D.C., para presentar por su propia iniciativa proyectos de acuerdo para la creación de instancias de coordinación, tales como comités (sectoriales, intersectoriales y locales), consejos (sectoriales, intersectoriales, locales y consultivos) mesas distritales, juntas y comisiones para el ejercicio de funciones de concertación, estructuración, seguimiento y articulación de políticas distritales y locales, así como de articulación y ejecución de estrategias, planes y programas que se desarrollen en el distrito Capital o en cada una de las 20 localidades?

El Concejo de Bogotá D.C. no puede por iniciativa propia presentar proyectos de acuerdo para la creación de instancias de coordinación, concertación, seguimiento, articulación, estructuración y de ejecución de estrategias, tales como comités, consejos, mesas, juntas y comisiones.

2. ¿Para la creación de las mencionadas instancias de coordinación, la iniciativa en la presentación de los proyectos de acuerdo está reservada de forma exclusiva al Alcalde Mayor?

3. ¿La fijación de funciones a las instancias de coordinación, que en últimas están conformadas por entidades y organismos distritales, es competencia propia del Concejo Distrital, sin que medie iniciativa del Alcalde, o ello comportaría una violación a los artículos 13 y 55 del Decreto Ley 1421 de 1993?"

Por su unidad temática se responden los interrogantes 2 y 3.

Los proyectos de acuerdo que pretendan crear las instancias antes enunciadas, en las que naturalmente harían presencia entidades distritales, son de iniciativa exclusiva del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., tal como se encuentra establecido en el Decreto 1421 de 1993.

iii) Conclusiones

De conformidad con lo expuesto, se concluye que el Concejo Distrital NO tiene la competencia para dictar los contenidos del proyecto de acuerdo 648 de 2025, dado que con la misma se invade el componente operativo de la gestión administrativa, confiado al Alcalde Mayor de Bogotá a través del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, así como la reserva de iniciativa en materia de definición de la estructura de la administración distrital y las competencias asignadas legalmente en materia de seguridad y convivencia al alcalde mayor (artículo 35 Dec. 1421 de 1993; artículo 91, ley 136 de 1994 y artículos 17, 198, 204 y 205 de la Ley 1801 de 2016).

ANÁLISIS TÉCNICO

No se realizará análisis técnico, teniendo en cuenta que la Secretaría Jurídica Distrital no debe disponer de medios, insumos y mecanismos para la implementación y ejecución de las disposiciones propuestas en el proyecto de acuerdo.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

Las señaladas en el análisis jurídico.

¿GENERA GASTOS ADICIONALES?

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2310460-FT-087 Versión 01

Teniendo en cuenta que la Secretaría Jurídica Distrital no debe disponer de recursos de su presupuesto para implementar y ejecutar el proyecto de acuerdo, no se realizará análisis presupuestal.

Si _____ No _____

VIABILIDAD DEL PROYECTO:

Si _____ No _____

De conformidad con el numeral 3 del artículo 16 del Decreto Distrital 438 de 2019, la Secretaría de Despacho designada como coordinadora del proyecto de acuerdo, será la principal responsable de emitir el pronunciamiento a la iniciativa propuesta, desde los aspectos jurídico, técnico y presupuestal, e igualmente, el mismo sector coordinador definirá con claridad la viabilidad o inviabilidad total o parcial de la iniciativa, conforme lo previsto en el inciso primero del artículo 17 ídem.

Cordialmente,



ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
Subsecretaría Jurídica Distrital



ANDRÉS FELIPE PUENTES DÍAZ
Director Distrital de Doctrina y
Asuntos Normativos

Proyectó: Daniel Granados – Profesional Especializado - Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos

Revisó: Andrés Felipe Puentes Díaz – Director Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos

Rubén Darío Gallego-Profesional Especializado - Subsecretaría Jurídica Distrital

Aprobó: Angélica María Acuña Porras – Subsecretaría Jurídica Distrital


Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2310460-FT-087 Versión 01

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO CONCEPTO A PROYECTOS</p>	Código: FOR-ATC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021002744 – 29/01/2021
		Página: 1 de 7

Bogotá D.C.

Doctor

CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO

Director de Relaciones Políticas

Secretaría Distrital de Gobierno

carlos.aparicio@gobiernobogota.gov.co

radicacionsdq.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co

Ciudad



Fecha: 2026-02-04 11:37:11

Radicado: S2026019249

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Cod Dependencia: 1 Fol:

Tipo Documental:

Remite: DESPACHO

Destino: SECRETARÍA DE GOBIERNO

Numero Folios: Anexos: 0

Asunto: Respuesta solicitud comentarios para primer debate al Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 "Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá".

Referencia: Radicado No. 20261700026351 de la Secretaría Distrital de Gobierno.
Radicado No. E2026004959 de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Respetado Doctor Aparicio, reciba un cordial saludo.

Esta Secretaría recibió su comunicación, mediante la cual solicita comentarios a Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 "Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá". Revisada la iniciativa, la Secretaría Distrital de Integración Social procede a manifestar que la iniciativa no se considera viable, a partir de los comentarios descritos en el anexo.


Cordialmente,

ROBERTO ANGULO SALAZAR

Secretario de Despacho

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobó:	Lina María Sánchez Romero – Subsecretaría de Gestión Institucional
Revisó:	Juan Camilo Narváez – Despacho.
Proyectó:	Juan Manuel Patiño Ruiz – Contratista Subsecretaría de Gestión Institucional.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO CONCEPTO A PROYECTOS</p>	Código: FOR-ATC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021002744 – 29/01/2021
		Página: 2 de 7

FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS

- I. **SECTOR QUE CONCEPTÚA:** Integración Social
- II. **ENTIDAD QUE CONCEPTÚA:** Secretaría Distrital de Integración Social.
- III. **NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO:** 016 **AÑO:** 2025

Marque con una X: 1er debate X 2do debate _____

IV. **TÍTULO DEL PROYECTO**

“Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá”.

V. **AUTOR(ES)**

Honorable Concejal Julián Espinosa Ortiz.

VI. **OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO**

“Crear la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá.”

VII. **COMPETENCIA LEGAL DEL CONCEJO DISTRITAL PARA PRESENTAR LA INICIATIVA**


I. **Competencia del Concejo de Bogotá, D.C., para la expedición de la iniciativa.**

El artículo 12, numeral 1, del Decreto Ley 1421 de 1993¹ establece que corresponde al Concejo Distrital “*dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito*”

En cuanto al objeto del proyecto de acuerdo, el artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993 asigna al Alcalde Mayor atribuciones específicas en esta materia: “*dictará, de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, los reglamentos, impartirá las órdenes, adoptará las medidas y utilizará los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas*”.

De forma complementaria, numeral 4 del artículo 38 del mismo Decreto, señala que corresponde al Alcalde Mayor “*ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos*” del Concejo. De la interpretación sistemática de estas disposiciones se concluye que es competencia del Alcalde Mayor implementar las acciones contra el hurto y la receptación previstas en el Plan Distrital de Desarrollo, tanto por su calidad de primera autoridad de policía como por su atribución reglamentaria

¹ “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO CONCEPTO A PROYECTOS</p>	Código: FOR-ATC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021002744 – 29/01/2021
		Página: 3 de 7

para hacer cumplir lo aprobado por el Concejo Distrital, sin embargo, es necesario hacer referencia a la competencia asignada a la Secretaría Distrital de Integración Social.

II. Falta de competencia de la Secretaría Distrital de Integración Social

El artículo 89 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 “*Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones*”, establece:

“(…) Artículo 89. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Integración Social. La Secretaría Distrital de Integración Social es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.

Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo para las secretarías, la Secretaría Distrital de Integración Social tiene las siguientes funciones básicas:

- a. Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades.”*

En el marco de esta función, la Entidad ha formulado y liderado la implementación de las siguientes políticas poblacionales:

- Política Distrital de Infancia y Adolescencia ²
- Política Distrital de Juventud ³
- Política Distrital de Envejecimiento y Vejez ⁴
- Política Distrital para las Familias ⁵
- Política Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle⁶


² SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. La información sobre las políticas públicas a cargo de la entidad se encuentra publicada y puede ser consultada en la página web institucional. En particular, en lo que se refiere a la Política Distrital de Infancia y Adolescencia en el siguiente Link: <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/lidera-sdis/politica-publica-de-infancia-y-adolescencia>.

³ SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. Ibídem. En particular, en lo que se refiere a la Política Distrital de Juventud, en el siguiente Link: <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/lidera-sdis/politica-publica-juventud>

⁴ SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. Ibídem. En particular, en lo que se refiere a la Política Distrital de Envejecimiento y Vejez en el siguiente Link <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/lidera-sdis/politica-publica-envejecimiento-y-la-vejez>

⁵ SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. Ibídem. En particular, en lo que se refiere a la Política Distrital para las Familias en el siguiente Link <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/lidera-sdis/politica-publica-familias>.

⁶ SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. Ibídem. En particular, en lo que se refiere a la Política Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle en el siguiente Link <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/lidera-sdis/politica-publica-habitabilidad-en-calle>.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO CONCEPTO A PROYECTOS</p>	Código: FOR-ATC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021002744 – 29/01/2021
		Página: 4 de 7

- Política Pública de Discapacidad para Bogotá D.C.⁷

Cada una de las políticas antes mencionadas contempla lineamientos, líneas de acción y acciones a cargo de los sectores de la administración distrital cuyo objeto misional tenga relación con la respectiva política pública, ninguna de las cuales es responsabilidad exclusiva de esta Entidad, ni tampoco guarda ninguna relación la ejecución de la iniciativa de afectación a estructuras criminales previstas en el Plan Distrital Desarrollo no es competencia de la Secretaría Distrital de Integración Social.

En este sentido, esta Entidad hace énfasis en que presta servicios sociales a las personas que habitan en el Distrito Capital siempre que, luego de un proceso de validación de condiciones, se establezca que son pobres o vulnerables, o cumplen los criterios de ingreso definidos para cada uno de los servicios.

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Integración Social no lidera la Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia y Construcción de Paz y Reconciliación 2023-2038⁸, por lo tanto, no se encuentra en cabeza de esta Entidad, la implementación de medidas específicas contra delitos como el hurto y la receptación.

III. Solicitud de exclusión de la Secretaría Distrital de Integración Social del articulado en cumplimiento del principio de legalidad de las competencias de las entidades públicas

La Secretaría Distrital de Integración Social hace énfasis en que, si bien el numeral 1, del artículo 12, del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que es competencia del Concejo: “1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito*”, esa Corporación a través de un Acuerdo no puede desconocer el objeto misional que la propia Corporación le asignó a esta Secretaría.


Por el contrario, es necesario resaltar que “*uno de los elementos definitorios del Estado moderno es la sujeción de sus autoridades al principio de legalidad*” (Consejo de Estado, concepto 2307 de 2006). Varias disposiciones constitucionales se ocupan de la materia: “(i) los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación de funciones (artículo 6); (ii) ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuye la Constitución y la ley (artículo 121); y (iii) no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o el reglamento [artículo 122]” (ibidem).

Algunas de las consecuencias prácticas de la vigencia del principio de legalidad, son las siguientes:

- “El principio constitucional de legalidad exige que la actuación de las diferentes autoridades públicas tenga una cobertura normativa suficiente o, lo que es lo mismo, esté basada en una norma habilitante de

⁷ SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. Ibídem. En particular, en lo que se refiere a la Política Distrital de Discapacidad para Bogotá D.C. en el siguiente Link <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/lidera-sdis/politica-publica-discapacidad-para-el-distrito-capital>.

⁸ Puede consultarse: https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/decretos-conpes/dts_pp_seguridadcj_paz.pdf en concordancia con el DECRETO 537 DE 2023. “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia, y Construcción de Paz y Reconciliación 2023-2038 y se dictan otras disposiciones”

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO CONCEPTO A PROYECTOS</p>	Código: FOR-ATC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021002744 – 29/01/2021
		Página: 5 de 7

competencia, que confiera el poder suficiente para adoptar una determinada decisión” (Concepto 2307 de 2006 emitido por el Consejo de Estado).

- *“Cuando una autoridad actúa sin competencia se produce un defecto orgánico en la actuación, en tanto que la competencia tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial y/o administrativa, para asegurar así el principio de seguridad jurídica que representa un límite para ella misma, en la medida en que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen.” (Corte Constitucional. T-929 de 2008).*

De acuerdo con el anterior extracto jurisprudencial, en contraste con el objeto misional de la Secretaría Distrital de Integración Social, no es jurídicamente viable imponerle a la Entidad a través de un Acuerdo Distrital Local haga parte como miembro permanente de la mesa intersectorial local contra la receptación, dado que de ninguna manera el objeto de la presente iniciativa obedece al objeto misional de la Entidad, por tal razón se solicita respetuosamente la exclusión del numeral 4 del artículo 6.

VIII. ANÁLISIS JURÍDICO

I. Alcance del principio de legalidad en las competencias administrativas

la Constitución Política de 1991 establece:

“Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente” (Negrilla fuera del texto)


Esta disposición debe ser analizada en concordancia con el artículo 6° de la Carta Política que señala:

“Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” (Negrilla fuera del texto)

Adicionalmente, el principio de legalidad de las competencias ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

“(…) el concepto competencia responde a la pregunta de ¿Qué puede hacer una persona?, ¿Qué puede hacer un órgano del Estado? o ¿Qué puede hacer el titular de ese órgano?, en el Estado. En el derecho privado se entiende que lo que puede hacer una persona responde al concepto de capacidad. En el derecho público lo que un órgano del Estado o un titular de éste puede hacer, se denomina competencia.

6. No obstante, las atribuciones y competencias de los órganos estatales en un Estado de Derecho no solo deben ser Constitucionales o legales sino igualmente deben ser preexistentes y explícitas. Estas características son las que reafirman el sometimiento del Estado al Derecho y por ende evita de manera tajante el abuso y el desafuero de los órganos estatales respecto de sus facultades constitucionales o legales.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO CONCEPTO A PROYECTOS</p>	Código: FOR-ATC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021002744 – 29/01/2021
		Página: 6 de 7

*En este mismo orden de ideas, **en un Estado de Derecho no pueden existir competencias implícitas, por analogía o por extensión**, porque ello permitiría que la autoridad pública se atribuya competencias según su voluntad y capricho, trazándose los límites de su propia actividad, invadiendo la órbita de actuación de las otras autoridades, abusando del poder y cercenando los derechos y libertades públicas. Situaciones éstas en contravía del Estado de Derecho como principio constitucional.*

La exigencia de que en un Estado de Derecho las competencias tengan que ser expresas se fundamenta en la necesidad de establecer reglas de juego claras entre las autoridades y los gobernados, con el fin de salvaguardar y proteger las libertades y demás derechos y bienes de las personas y, en últimas, evitar la arbitrariedad de los gobernantes y de los órganos estatales⁹ (...)” (Negrilla es del texto original).

Así pues, La Corte Constitucional ha precisado que la competencia es el límite jurídico que determina lo que un órgano del Estado está facultado para realizar, y que tal atribución debe ser siempre previa, clara y expresa, descartando la posibilidad de que se configure por analogía, extensión o interpretación implícita. Este criterio busca preservar la separación de funciones y evitar que una autoridad asuma facultades que no le han sido conferidas de manera legítima.

De igual manera, la jurisprudencia ha reiterado que en un Estado de Derecho las competencias deben estar explícitamente establecidas en disposiciones constitucionales o legales, garantizando reglas de actuación claras tanto para las autoridades como para los ciudadanos.

Bajo este marco normativo y jurisprudencial, corresponde al Sector Seguridad, Convivencia y Justicia de la administración distrital, bajo la dirección del Alcalde Mayor como primera autoridad de policía, ejecutar las acciones de control y prevención contra el hurto y la receptación previstas en el Plan de Desarrollo Distrital.


II. Intervención de la Secretaría Distrital de Integración Social en la Política Pública de Seguridad, Convivencia y Justicia y Construcción de Paz

La Secretaría Distrital de Integración Social no ejerce funciones de liderazgo en la Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia y Construcción de Paz y Reconciliación 2023-2038, adoptada mediante el Decreto Distrital 537 de 2023. Su participación se restringe a la atención de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), en armonía con la Política Pública Distrital de Juventud 2019–2030, establecida en el Documento CONPES 008 de 2019.

En desarrollo de esa competencia, la Entidad cuenta con el Servicio Forjar Restaurativo¹⁰, el cual consiste en: en “brindar atención especializada y diferenciada a los adolescentes y jóvenes remitidos por las Defensorías de Familia y los Juzgados penales para adolescentes adscritos al SRPA, para dar cumplimiento a las sanciones no privativas de la libertad y a las medidas de restablecimiento de derechos en el marco de procesos restaurativos, que

⁹ Corte Constitucional. Sentencia C-319 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA

¹⁰ Puede verse: https://www.integracionsocial.gov.co/images/docs/2025/Entidad/25072025-portafolio_servicios_secretaria_distrital_integracion_social_v16.pdf página 58.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO CONCEPTO A PROYECTOS</p>	Código: FOR-ATC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021002744 – 29/01/2021
		Página: 7 de 7

garanticen su participación activa en los contextos familiares y sociales como sujetos de derechos, posibilitando su responsabilización, la reparación e inclusión social contribuyendo al desarrollo de sus comunidades, mediante la aplicación del Modelo de Atención del servicio Forjar Restaurativo”.

De este modo, la prestación del Servicio constituye funcione de naturaleza social y restaurativa, no incluyen la adopción de medidas de control, persecución o neutralización de estructuras criminales dedicadas al hurto o a la receptación, las cuales pertenecen al ámbito exclusivo de las autoridades del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia.

En conjunto, se aclara que la Secretaría Distrital de Integración Social, no es competente de ser miembro permanente de la mesa intersectorial contra la receptación, por que como ya se definió, el objeto Misional de la Entidad, no está orientado a la prevención de delitos contra el patrimonio económico, pues estas estrategias son competencia del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia de la Administración Distrital según el artículo 2 del Decreto Distrital 637 de 2016¹¹.

III. Conclusiones

Se solicita la exclusión de la Secretaría Distrital de Integración Social del articulado dadas las competencias de la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco del plan de acción de la Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia, y Construcción de Paz y Reconciliación 2023-2038, en concordancia con la Política Distrital de Juventud, guardan relación con el objeto misional de esta Entidad, es decir la prestación de servicios sociales, en este caso a adolescentes y jóvenes atendidos integralmente (...) a partir de su vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, (SRPA), hasta la fase de post-egreso.

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

Consolidación de las principales conclusiones y viabilidad. Marque con una X:

- Viable _____
- Viable sujeto a comentarios y/o modificaciones al articulado _____
- No Viable X

Aprobó:	Lina María Sánchez Romero – Subsecretaria de Gestión Institucional Laura Alejandra Contreras Salazar – Jefe Oficina Jurídica
Revisó:	Juan Camilo Narváez – Despacho Juan Manuel Patiño R - Contratista Subsecretaría de Gestión Institucional
Proyectó:	Andrea Vega Rodríguez – Profesional Especializado – Oficina Jurídica

¹¹ “Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones.”



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



DS

202610000889301

Información Pública

Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., febrero 23 de 2026

Señor

Carlos Alberto Aparicio Patiño

Director de Relaciones Políticas

Secretaría Distrital de Gobierno

Calle 11 No 8-17 Edificio Liévano

radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co

asuntosnormativosdrp@gobiernobogota.gov.co

Bogotá - D.C.

REF: Solicitud pronunciamiento de viabilidad proyecto de Acuerdo número 16 de 2026 para primer debate Radicado 202661200283672 (Radicado de salida SDG No. *20261700026361*)

Atendiendo a su solicitud de comentarios para el primer debate respecto al proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 *“Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá”* me permito manifestar que se ratifica el concepto de No viabilidad emitido con anterioridad respecto del proyecto de Acuerdo No. 1018 de 2025, enviado a la Secretaría Distrital de Gobierno mediante radicado de salida No. 202510016597811 del 16 de diciembre de 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que revisado el proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026, se evidencia que en su totalidad corresponde al espíritu y texto del articulado plasmado en el proyecto de Acuerdo No. 1018 de 2025, sin presentar modificación alguna. Anexo concepto del Instituto de Desarrollo Urbano.

Cordialmente,

Claudia Andrea Diaz Acosta

Secretaría de Despacho

Firma mecánica generada en 23-02-2026 07:49 AM

Anexos: Concepto de entidad

Cc Secretaría De Hacienda De Bogotá -- - Carrera 30 N° 25-90 P. 6 CP: Radicacionhaciendabogota@shd.gov.co-(Bogotá-D.C.)

Aprobó: Natalia Catalina Cogollo Uyaban-Dirección de Normatividad y Conceptos

Aprobó: Paulo Andres Rincon Garay-Subsecretaría de Gestión Jurídica

Revisó: Daniel Álvarez Cotrino – Enlace con el Concejo

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

PA01-PR15-MD01 V4.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO
DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS

SECTOR QUE CONCEPTÚA: Movilidad

ENTIDAD QUE CONCEPTÚA: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 16 AÑO: 2026

1er debate X, 2do debate _____

TÍTULO DEL PROYECTO

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ESTRATEGIA CONTRA LA RECEPCIÓN DE AUTOPARTES, CELULARES Y MOBILIARIO URBANO EN BOGOTÁ"

AUTOR (ES)

H.C. JULIAN ESPINOSA ORTIZ - PARTIDO POLÍTICO ALIANZA VERDE

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

Este proyecto busca la creación de proyectos para combatir la receptación de celulares, autopartes y mobiliario público; objetivo que resulta de crucial importancia dada la necesidad de llegar a la reducción del crimen y la delincuencia, de establecer mecanismos de protección del Patrimonio Público y Privado, generar la desarticulación de redes Delictivas y dificultar la circulación de bienes robados.

Adicionalmente, con el proyecto se pretende proteger el patrimonio público y privado toda vez que "(...) *La receptación afecta tanto a entidades públicas como a individuos privados. La recuperación de mobiliario público, celulares y autopartes robadas contribuye a proteger el patrimonio colectivo y personal.* (...) " y la receptación fomenta un mercado negro para los bienes robados. Al dificultar la venta y distribución de estos bienes, se desincentiva esta economía ilícita.

Por último, el hurto de celulares, autopartes y mobiliario público generan inseguridad en la ciudadanía. Al reducir este tipo de delitos, se contribuye a generar un entorno más seguro y confiable para todos.

En resumen, los proyectos orientados a combatir la receptación de celulares, autopartes y mobiliario público no solo protegen el patrimonio y la seguridad, sino que también

contribuyen a debilitar redes delictivas, disminuir la economía ilegal y promover una cultura de colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen.

COMPETENCIA LEGAL DEL CONCEJO DISTRITAL y/o ADMINISTRACIÓN DISTRITAL PARA PRESENTAR y/o APROBAR LA INICIATIVA

Análisis de Competencia Legal:

El Decreto Ley 1421 de 1991 Estatuto Orgánico de Bogotá, expresa en su artículo 12 lo siguiente:

“Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.” ...***

El proyecto de Acuerdo basa su competencia en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.

Al respecto este Despacho considera que el proyecto si bien plantea en su artículo 4º la creación de la “Mesa Intersectorial Local contra la Receptación”, conformada por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Gobierno y las Alcaldías Locales, cuyas funciones se prevén en el artículo 5º del proyecto, lo cual se podría enmarcar dentro del marco de la competencia señalada; no así, el planteamiento de que la “Estrategia de Receptación”, que es el objeto del proyecto, se realice a partir de la creación de nuevas funciones para las Secretarías de Convivencia y de Gobierno, lo que si bien podría encontrarse dentro del marco de las competencias del H Concejo, tendría que modificar el Acuerdo Distrital 257 de 2006, de estructura orgánica del Distrito, lo cual no es la pretensión del proyecto.

En conclusión, este Despacho considera que, si bien el H. Concejo posee las competencias de conformidad con el Estatuto de Bogotá, para avanzar en el proyecto, este debe ser reestructurado de fondo, estableciendo que su objeto es la creación de la “Mesa Intersectorial Local contra la Receptación” la cual definirá ya avanzará en la Estrategia de Receptación en el marco de las funciones de las entidades, coadyuvados y articulados con los entes investigadores competentes (SIJIN – DIJIN – FISCALÍA) en la materia. Por lo anterior este despacho considera que es viable la competencia, pero condicionada al replanteamiento del objeto del proyecto.

ES COMPETENTE

Sí ☒ No ☐

ANÁLISIS JURÍDICO

En línea con el análisis de competencia del Concejo, anotado anteriormente, es pertinente señalar que de acuerdo con Acuerdo Distrital 637 de 2016 que modifica el Acuerdo Distrital 257 de 2006, creando la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en su artículo 4º expresa que corresponde a esta Secretaría orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los sectores administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C, es evidente que dichas competencias son suficientes para avanzar en la creación de una “Mesa Intersectorial Local contra la Receptación” estableciendo su conformación, y que a su vez definirá la Estrategia Distrital contra la Receptación, en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la participación de los gobiernos locales, y en todo caso, articulados con los entes investigadores competentes en la materia (SIJIN – DIJIN – FISCALÍA).

De lo anterior se deriva que ni el objeto del proyecto es crear una “Estrategia de Receptación”, que como lo expresa el artículo 1º del proyecto sería una competencia de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia y la Secretaría Distrital de Gobierno, ni mucho menos en establecer que los “elementos constitutivos de la estrategia” (artículo 2º del proyecto, sería atribuirle algunas competencias, creando nuevos roles a las Secretarías de Convivencia y Gobierno, quienes deben actuar en el marco de las funciones atribuidas por citado Acuerdo Distrital 637 de 2016. Adicionalmente tampoco, el proyecto de Acuerdo debería señalar la conformación de la Mesa, ya que se trataría de una competencia de la Secretaría de Convivencia y Seguridad.

Como se observa, se trata de un proyecto que no se relaciona misional, ni operativa, ni estratégicamente con el IDU, que conforme con su Acuerdo de creación (AD 19 de 1972) y sus estructura orgánica (Acuerdos 01 de 2009 y 04 de 2025 del Consejo Directivo del IDU), tiene a su cargo la ejecución de las obras de infraestructura vial y mantenimiento para la movilidad, y el espacio público para el desarrollo urbano de Bogotá; en desarrollo de lo anterior, el IDU realiza la construcción de las ciclorrutas, andenes, puentes peatonales, zonas bajo puentes, sardineles, alamedas, plazoletas y plazas, también el

RES-F004

Versión: 02

Vigencia: 12 de julio de 2018

Página 3 de

mantenimiento de los monumentos y bienes de interés cultural; de la misma forma, lleva a cabo el mantenimiento permanente de la malla vial de la ciudad y contribuye en la ejecución de los proyectos de conservación, como estrategia de ordenamiento para el Distrito Capital y la Política de Movilidad; así como también para desarrollar e implementar el plan de administración, mantenimiento, dotación, preservación y aprovechamiento económico del espacio público de los sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido que esté a cargo de la entidad.

Dado lo anterior se entiende exceptuado el IDU en relación con la necesidad de participación en la "Mesa Intersectorial Local contra la Receptación" prevista en el proyecto de Acuerdo.

Sin embargo, el Instituto si considera necesario que se revise el objeto del proyecto, la competencia del H. Concejo y la procedencia de algunos artículos del proyecto como anteriormente se ha señalado.

ANÁLISIS TÉCNICO

Considerando que el proyecto de acuerdo versa sobre la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano enmarcado en acciones de control tipo registro y similares, se considera que el mobiliario urbano sujeto a la estrategia corresponde a aquel que se encuentra instalado y en operación, el cual; una vez terminada la obra por parte del Instituto, se efectúa entrega a las diferentes entidades para su administración y/u operación y por lo tanto ya no estaría a cargo de este Instituto.

De otro lado, aunque el IDU ostenta la calidad de administrador de ciertos elementos que integran el espacio público, se precisa que según el artículo 12 del Decreto Distrital 315 de 2024, el mobiliario instalado en dichos elementos del espacio público es administrado por diferentes entidades ajenas al instituto lo anterior, coadyuva el argumento de que el Instituto en principio no haría parte de "Mesa Intersectorial Local contra la Receptación", lo que no implica que una vez definida la Estrategia Distrital de Receptación, puede ser partícipe de la misma, en el marco de sus atribuciones y misionalidad.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

Al revisar el texto del Proyecto de Acuerdo se evidencia falta de correspondencia y articulación entre la justificación y propósito planteado (exposición de motivos) y el articulado propuesto.

Adicionalmente se debe recoger lo expuesto en este análisis, y validar el objeto del proyecto, la competencia del H Concejo y la posibilidad de que se supriman los artículos 2 y 6 del proyecto. Además, de separar el artículo 1º en dos, uno estableciendo las entidades que tendrían la competencia de crear la “Estrategia Distrital contra la Receptación” y un artículo aparte, sobre definiciones. Por último, debería existir un artículo adicional sobre el alcance del proyecto.

Si eventualmente, el proyecto mantuviera el artículo 2º, en este se indica que formará parte de la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá la Secretaría de Movilidad y adicionalmente en el párrafo del artículo primero son definidos entre otros bienes los considerados como mobiliario urbano así: “(...) los paraderos, sillas, mesas, bancas, señales y otros elementos que están dados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cuando se encuentran en los espacios públicos (...)” se recomienda sean precisadas las definiciones de los bienes de esta categoría a fin de generar la correlación con la participación de las entidades que conforman en el sector movilidad y de donde, definitivamente por su misionalidad y alcance de las funciones asignadas no le corresponde participar al Instituto de Desarrollo Urbano.

¿GENERA GASTOS ADICIONALES EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD?

Si _____ No X

VALORACIÓN DEL GASTO. En el entendido que el Proyecto de Acuerdo no ordena la disposición de recursos adicionales para aplicación del mismo, sino con los mismos recursos con los que cuenta la entidad para temas de divulgación de la información.

Pueden ser atendidas por el Presupuesto del Sector.

Si X No _____

VIABILIDAD DEL PROYECTO (Señalar con X la opción adecuada)

Viable _____

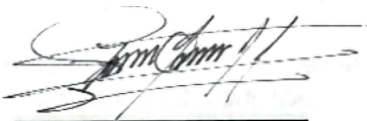
Viable sujeto a comentarios y/o modificaciones al articulado _____

No Viable X _____

Comentarios adicionales sobre la viabilidad del proyecto de Acuerdo:

El presente Proyecto de Acuerdo no es viable en tanto, como se ha indicado no sea clarificado su objeto, la competencia, y el articulado conforme al propósito planteado.

Cordialmente,



Orlando Molano Pérez
Director General

V°B°: Martha Liliana González Martínez – Subdirección General Jurídica

V°B°: José Javier Suarez Bernal – Subdirector General de Desarrollo Urbano

V°B°: William Orlando Luzardo – Director Técnico de Proyectos

Elaboró: Erika Andrea Prieto Pérez – Contratista DTP



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Al contestar cite este número:
Radicado DADEP No. 20261300008851



Bogotá D.C, 2026-01-27
Código OJ-130

Correo Electrónico

Doctor
CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO
Director de Relaciones Políticas
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co
Carlos.aparicio@gobiernobogota.gov.co
Calle 11 N. 8- 17 Tel-3387000-Ext-3551-3528
Ciudad

REFERENCIA: Radicado Gobierno 20261700026381-22-01-2026
Radicado DADEP- 20264000017122-23-01-2026

ASUNTO: Solicitud pronunciamiento primer Debate Proyecto de Acuerdo No. 016
2026

Respetado Doctor Aparicio, reciba un cordial saludo.

En atención al oficio con radicado de la referencia, donde se solicita que se emitan los pronunciamientos para el Primer debate frente al Proyecto de Acuerdo 016-2026 *"Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá"*. Al respecto, le informamos que, una vez revisada la exposición de motivos, así como su articulado, desde las funciones que le asisten al DADEP, se concluye que es viable sujeto a modificaciones en el articulado.

En los anteriores términos queda resuelta su solicitud, estamos atentos a cualquier inquietud que se pueda generar en el marco del Proyecto de Acuerdo y sea de nuestra competencia.

Agradezco la atención prestada.

**BASTIDAS
UBATE DORA
LUCIA**

Firmado digitalmente
por BASTIDAS UBATE
DORA LUCIA
Fecha: 2026.02.04
12:54:51 -05'00'

LUCÍA BASTIDAS UBATE
Directora

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Anexo: Formato de Concepto
Proyectó: Mariela Gordillo Castro-Profesional Universitario OJ^{MGC}
Luisa Pérez Gaitán- Abogada Contratista OJ

Revisó: Geovanni Andrés Cárdenas Mogollón- Jefe Oficina Jurídica





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Nury Peralta Cardoso – Asesora Dirección
Fecha: Enero -2026



FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO
DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS

SECTOR QUE CONCEPTÚA: Gobierno

ENTIDAD QUE CONCEPTÚA: Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 016 AÑO: 2026

1er debate _____X_____, 2do debate_____

TÍTULO DEL PROYECTO

"Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá"

AUTOR

Honorable Concejal Julián Espinosa Ortiz
Partido Alianza Verde

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

Crear la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá

COMPETENCIA LEGAL DEL CONCEJO DISTRITAL y/o ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
PARA PRESENTAR y/o APROBAR LA INICIATIVA

Análisis de Competencia Legal:

El artículo 313 de la constitución política de Colombia dispone lo siguiente:

"Corresponde a los concejos:

- 1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.*

A su vez el Decreto ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, expresa en su artículo 12 Numeral 1 lo siguiente:

"Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito."*

Conforme con lo anterior, se encuentra que el Concejo de Bogotá D.C, es competente para la presentación de esta iniciativa, de acuerdo con el numeral 1 artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. Así mismo este organismo está facultado para establecer disposiciones de carácter general que redunden en el eficiente ejercicio de la actividad objeto de la iniciativa normativa.

Si ☒ No ☐

ANÁLISIS JURÍDICO

El Proyecto de Acuerdo N.º 016 de 2026, propuesto por el Concejo de Bogotá, tiene como objetivo establecer una estrategia integral para combatir la receptación de celulares, autopartes y mobiliario público. Esta iniciativa no solo busca proteger el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía, sino también debilitar las redes delictivas, reducir la economía ilegal y fomentar una cultura de legalidad y colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen.

Sobre el particular es menester señalar que corresponde a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de acuerdo con los artículos 2 y 5 del Acuerdo 637 de 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"

"Artículo 2. Misión del sector de Seguridad, Convivencia y Justicia. El sector administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene la misión de liderar, planear y orientar la formulación, la adopción, la ejecución, la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas, los planes, los programas y proyectos, las acciones y las estrategias en materia de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a la justicia, orden público, prevención del delito, las contravenciones y conflictividades, y la coordinación de los servicios de emergencias en el Distrito Capital en el marco del primer respondiente.

Artículo 5. Funciones básicas de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. (...)

a. Liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad.

b. Liderar, orientar y coordinar con las entidades distritales competentes, el diseño, la formulación, la adopción y la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de prevención y cultura ciudadana que promuevan la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el cumplimiento de la ley.

q. Liderar, orientar y coordinar las alianzas estratégicas con las comunidades, el sector privado y las entidades del orden distrital, territorial y Nacional, orientadas a la convivencia, la prevención del delito, la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia”.

De lo anterior se infiere que, en el contexto del proyecto de acuerdo, corresponde a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia liderar esta iniciativa, coordinando de manera más efectiva con otras entidades Distritales y locales según sea necesario. Esta coordinación garantiza la implementación eficaz de medidas preventivas y operativas destinadas a combatir la receptación en la ciudad de Bogotá.

Por otro lado, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público tiene, entre otras funciones, fijar las políticas en materia de defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público en el Distrito Capital de Bogotá.

En ese sentido, según el Acuerdo 018 de 1999, expedido por el Concejo de Bogotá, tiene como misión en su artículo 2º: “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá D.C., por medio de una eficaz defensa del espacio público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una nueva cultura del Espacio Público que garantice su uso y disfrute común y estimule la participación comunitaria”.

En esos términos, las disposiciones mencionadas respaldan los objetivos del proyecto de acuerdo con el marco legal vigente, a continuación se procede a hacer un análisis correspondiente:

<p>Epigrafe “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ESTRATEGIA CONTRA LA RECEPTACIÓN DE AUTOPARTES, CELULARES Y MOBILIARIO URBANO”</p>	<p>El epigrafe es coherente con las competencias del Concejo de Bogotá, conforme a las disposiciones legales analizadas previamente.</p> <p>El Concejo de Bogotá, posee la competencia para dictar normas en materia de ordenamiento territorial y uso del espacio público, conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia. Esto incluye formular políticas y lineamientos destinados a promover la seguridad, la convivencia ciudadana, el comercio, la</p>
---	---



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

	<p>cultura, y el reverdecimiento en áreas públicas específicas de la ciudad.</p> <p>El proyecto se centra claramente en la creación de una estrategia específica contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá. Todos los artículos y disposiciones del proyecto están alineados con este propósito principal, desde la definición de términos hasta las acciones específicas que se proponen.</p>
<p><i>ARTÍCULO 1. La Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia y la Secretaría Distrital de Gobierno crearán la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá.</i></p> <p><i>PARÁGRAFO 1: Entiéndase como autopartes las piezas de un vehículo automóvil o motocicleta que se pueden comercializar por separado.</i></p> <p><i>PARÁGRAFO 2: Entiéndase como celular a los dispositivos telefónicos móviles de comunicación.</i></p> <p><i>PARÁGRAFO 3: Entiéndase como mobiliario urbano, los paraderos, sillas, mesas, bancas, señales y otros elementos que están dados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cuando se encuentran en los espacios públicos.</i></p> <p><i>PARÁGRAFO 4: Entiéndase como mobiliario de servicios públicos, los contadores, tapas, canecas, luces, cables y demás elementos necesarios para brindar un óptimo servicio a la ciudadanía</i></p>	<p>La Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia es la entidad que debe coordinar con las Entidades Distritales competentes, el diseño, la formulación, la adopción y la ejecución de políticas, relacionadas con el presente Proyecto de Acuerdo.</p> <p>Aunque el proyecto define claramente términos como autopartes, celulares y mobiliario urbano, podría ser útil agregar referencias específicas a normativas existentes o estándares técnicos, para evitar interpretaciones ambiguas.</p>
<p>ARTÍCULO 2. Son elementos constitutivos de la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá los siguientes:</p> <p>1.- La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia priorizará las zonas de acuerdo con los factores de riesgo y ocurrencia de delitos por hurto de vehículos y motocicletas, celulares y mobiliario urbano y de servicios públicos, así como las zonas de comercio de autopartes y talleres mecánicos, comercialización y reparación de celulares y comercio de reciclaje y materiales.</p> <p>2.- La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de las Alcaldías Locales, llevará un detallado listado de los establecimientos comerciales de autopartes, talleres</p>	<p>Teniendo en cuenta que el presente Proyecto de Acuerdo busca garantizar condiciones de seguridad, en el artículo 6 del Acuerdo 735 de 2019 establece que corresponde a los alcaldes locales:</p> <p><i>"(...) 1. Realizar los operativos de inspección y vigilancia que buscan garantizar la seguridad y convivencia en el territorio de su localidad, con la coordinación de la Subsecretaría de Gestión Local, o la dependencia que haga sus veces en la Secretaría Distrital de Gobierno. 2. Articular con las demás autoridades de Policía, las acciones tendientes a prevenir y eliminar los hechos que perturben la convivencia en el territorio de su localidad. 3. Articular con las demás Autoridades de Policía para que se adopten las medidas administrativas y de Policía que correspondan para garantizar la protección, recuperación y conservación del espacio público y del</i></p>

<p>mecánicos, venta y reparación de celulares, bodegas de reciclaje y venta de materiales de la localidad, así como las zonas en las que se realice alguna de estas actividades de manera ilegal.</p> <p>3.- La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de las Alcaldías Locales, llevará un archivo actualizado que contenga la información completa de los operativos de Inspección Vigilancia y Control (IVC) realizados en estos establecimientos, con el fin de hacer seguimiento a las medidas correctivas aplicadas a cada uno de estos y garantizar el posterior traslado a las inspecciones de policía.</p> <p>4.- La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales, coordinarán las acciones de control conjuntamente con la Estación de Policía de la localidad, con el fin de verificar el correcto cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento de los establecimientos comerciales con venta de autopartes, talleres mecánicos, establecimientos de venta y reparación de celulares y bodegas de reciclaje. Estas acciones de control se deberán realizar como mínimo una vez al mes en cada una de las diferentes líneas de acción (Autopartes – Celulares – Mobiliario).</p> <p>5.- La Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales, dispondrá de los recursos necesarios para llevar a cabo los operativos de control. (Transporte, carga de elementos y bodega para almacenaje).</p> <p>6.- La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales, coordinarán las acciones de control conjuntamente con la Estación de Policía de la localidad, con el fin de realizar registros a vehículos y motocicletas, carretas u otros medios de transporte utilizados para la carga del reciclaje, así como registros a personas realizando la respectiva verificación de IMEI</p>	<p>ambiente (...)” [Negrillas nuestras].</p> <p><i>Por otro lado, los artículos 2 y 5 del acuerdo 637 de 2016 “Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones” establece que corresponde a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia:</i></p> <p><i>Artículo 2. Misión del sector de Seguridad, Convivencia y Justicia. El sector administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene la misión de liderar, planear y orientar la formulación, la adopción, la ejecución, la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas, los planes, los programas y proyectos, las acciones y las estrategias en materia de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a la justicia, orden público, prevención del delito, las contravenciones y conflictividades, y la coordinación de los servicios de emergencias en el Distrito Capital en el marco del primer respondiente.</i></p> <p>En ese sentido, y tras la revisión de las competencias de las entidades mencionadas, este Departamento Administrativo considera que las entidades responsables de la ejecución de la iniciativa actúan dentro del marco de sus funciones y competencias, conforme a lo establecido en el proyecto.</p> <p>No obstante, si bien se menciona la necesidad de coordinación interinstitucional, no se define con claridad cuál entidad liderará cada una de las fases del proceso. Es fundamental precisar qué entidad tendrá la autoridad y responsabilidad final en la planificación, ejecución y seguimiento de cada medida, con el fin de garantizar una implementación efectiva.</p> <p>Asimismo, se recomienda que la regulación sobre autopartes tenga un alcance amplio, de modo que incluya no solo vehículos automotores, sino también autopartes de bicicletas, patinetas y otros medios de transporte alternativo. Esto es especialmente</p>
--	---



**ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.**
Secretaría de Gobierno

<p>(International Mobile Equipment Identity) número único de identificación de dispositivos móviles, con el fin de garantizar que los vehículos, motocicletas o los celulares no se encuentren reportados por hurto. Estas acciones de control se deberán realizar como mínimo una vez por semana en los sectores previamente priorizados.</p> <p>7.- La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en conjunto con la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales, rendirán un informe trimestral al Consejo Local de Seguridad, que contenga acciones realizadas y resultados de estas.</p> <p>8.- Cuando la evidencia así lo indique, se dará traslado de las direcciones de establecimientos comerciales, talleres de mecánica o puntos críticos, a la Dirección de Seguridad de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, área que articulará acciones con los entes investigadores (DIJIN – SIJIN – FISCALÍA) con el fin de impactar estructuras delincuenciales dedicadas a la receptación de autopartes, celulares o mobiliario público.</p>	<p>importante, dado que el impacto que se pretende mitigar no se limita exclusivamente a motocicletas y vehículos tradicionales, y actualmente el proyecto no contempla lineamientos específicos sobre estos otros medios de transporte.</p>
<p>ARTÍCULO 3. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de la Dirección de Seguridad, articulará con los entes investigadores (SIJIN – DIJIN – FISCALÍA) acciones de control por lo menos dos veces al mes en la ciudad de Bogotá, con el fin de prevenir el delito de receptación de autopartes. Celulares y mobiliario público.</p>	<p>Este artículo establece condiciones específicas a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; en consecuencia, corresponde a dicha entidad emitir el pronunciamiento correspondiente.</p>
<p>ARTÍCULO 4. La Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia conjuntamente con la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales crearán la mesa intersectorial local contra la receptación.</p>	<p>Para este Departamento Administrativo es pertinente el contenido de este artículo, por que se encuentra acorde con las competencias de cada una de esas entidades.</p>
<p>ARTÍCULO 5. Son funciones de la mesa intersectorial local contra la receptación las siguientes: a-Realizar seguimiento, evaluación y priorización de acciones de prevención, convivencia ciudadana y control en las zonas priorizadas por cada una de las líneas de acción (Autopartes, celulares y mobiliario público).</p>	<p>Esta disposición se considera viable y contribuye a que el Distrito y las autoridades concentren sus esfuerzos en los distintos eslabones de la cadena productiva ilegal, fortaleciendo así la política de prevención de estos delitos. No obstante, se estima necesario que el proyecto incluya una descripción clara del rol y las funciones específicas que asumirán las entidades que</p>



**ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.**
Secretaría de Gobierno

<p>b- Citar a las entidades distritales involucradas para articular las acciones de prevención, convivencia ciudadana y control a implementar.</p> <p>c- Coordinar acciones intersectoriales con el fin de sensibilizar y capacitar a los actores involucrados en la problemática. (Comerciantes, mecánicos, vendedores, recicladores, habitantes de calle, carreteros y comerciantes del reciclaje).</p> <p>d- Rendir informe trimestral al Consejo Local de Seguridad, de las Mesas realizadas, acciones operativas y resultados obtenidos.</p> <p>e-La mesa intersectorial local contra la receptación sesionará como mínimo cada 3 meses. Para ello la Secretaría Distrital de Gobierno a través de las Alcaldías Locales coordinará la logística para la realización de las reuniones.</p>	<p>integrarán la mesa intersectorial, con el fin de garantizar una articulación efectiva y una adecuada asignación de responsabilidades.</p>
<p>ARTÍCULO 6. Son integrantes permanentes de la mesa intersectorial local contra la receptación las siguientes entidades:</p> <p>1.- Un delegado de la Alcaldía Local del área de Gestión Políciva quien presidirá el espacio.</p> <p>2.- Un delegado de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia quien llevará la Secretaría Técnica.</p> <p>3.- Los delegados de la UAESP de Recolección, barrido y limpieza, Aprovechamiento y Alumbrado público</p> <p>4.-. Un delegado de la Subdirección Local de la Secretaría Distrital de Integración Social.</p> <p>5.-Un delegado del DADEP.</p> <p>6.-. Un delegado de la Secretaría Distrital de Movilidad.</p> <p>7.- Un delegado de la Estación de Policía Local (Dinamizador de código).</p>	<p>Se considera necesario incluir de manera explícita las funciones que deberán asumir cada una de las entidades mencionadas, en concordancia con las competencias que les han sido atribuidas por el marco normativo vigente. En particular, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), el Acuerdo Distrital 079 de 2003, modificado por el Acuerdo 735 de 2019, mediante el cual se expide el Código de Policía de Bogotá, D.C., así como el Decreto Distrital 644 de 2025, que establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y lo previsto en el Decreto 670 de 2025 entre otras disposiciones normativas aplicables.</p> <p>La inclusión de estos elementos permitirá definir con mayor precisión los roles y responsabilidades de las entidades participantes, lo cual es fundamental para asegurar la efectiva articulación interinstitucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos en la iniciativa.</p>
<p>ARTÍCULO 7. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.</p>	<p>Sobre este artículo no hay comentarios adicionales.</p>

ANÁLISIS TÉCNICO

<p>1. Es menester aclarar que la Defensoría del Espacio Público no es la administradora de la totalidad del mobiliario urbano instalado en la ciudad de Bogotá, de conformidad con lo</p>

establecido en el artículo 2.2.3.3.2. del Decreto 1077 de 2015 y el artículo 152 del Decreto 670 del 27 de diciembre del 2025 a las entidades administradoras del espacio público les corresponde proponer y gestionar la instalación de mobiliario que complemente el espacio público, así como su mantenimiento.

Comentado [lf1]: Es necesario que se ajuste el concepto técnico, el decreto 315 esta derogado, fue compilado en el Decreto 670 de 2025.

Se considera importante que se convoque a las entidades que autoricen la instalación del mobiliario urbano en el espacio público para que junto con ellas se coordinen las acciones que haya a lugar, por lo que se sugiere que el DADEP no haga parte del comité permanente, sino sea convocado a las mesas en conjunto con las otras entidades que administren mobiliario urbano.

2. El mobiliario urbano a cargo del Dadep fue entregado en administración a la empresa Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S, bajo el contrato de concesión 110-00129-186-0-2020 cuyo objeto es "Otorgar una concesión para la realización y el financiamiento del diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la actualización, el mantenimiento, la operación, el traslado y la reposición del mobiliario urbano de Bogotá D.C.".

Mediante este contrato se entregó en administración el siguiente mobiliario urbano:

- Bancas M-30 - Cantidad: 960
- Bancas M-50 - Cantidad: 3.000
- Paraderos M10 - Cantidad: 1.665
- Panel publicitario – Cantidad 1.613
- Señales verticales – Cantidad: 7.531

Según las cláusulas del contrato, el concesionario tiene la obligación de adquirir póliza todo riesgo mediante la cual se encuentra asegurado todo el mobiliario entregado en administración, así mismo el concesionario tiene la obligación de adelantar las acciones policivas y judiciales.

3. En el artículo 6 no se incluyó como miembro permanente al delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, se sugiere incorporar a este delegado pues dentro del artículo 2 la Secretaría Distrital de Gobierno tendrá varias funciones que desarrollar.
4. Se recomienda incluir la oportunidad de citar otras entidades distritales o nacionales a la Mesa Intersectorial Local, para tratar temas relacionados con la problemática, por ejemplo el ICBF, Migración Colombia, Secretaría de la Mujer e IDIPRON.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

NINGUNO

¿GENERA GASTOS ADICIONALES EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD?

Si _____ No _____

No se realizará análisis de los gastos que pueda demandar la implementación o ejecución de la iniciativa, por cuanto, según el numeral 3 del artículo 17 del Decreto Distrital 438 de 2019, corresponde a los sectores y en particular al sector coordinador:

(...) "analizar y manifestar si dentro de la vigencia fiscal respectiva cuenta en su presupuesto con los recursos necesarios para la ejecución de la iniciativa, definiendo con claridad si la exposición de motivos cumple con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y el literal d) del artículo 67 del Reglamento Interno del 1077 Concejo de Bogotá D.C., o las disposiciones que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan".

VIABILIDAD DEL PROYECTO (Señalar con X la opción adecuada)

Vsdfgiabie _____

Viable sujeto a comentarios y/o modificaciones al articulado ____x_____

No Viable _____

Comentarios adicionales sobre la viabilidad del proyecto de Acuerdo: N/A

Atentamente,
BASTIDAS

**UBATE DORA
LUCIA**

Firmado digitalmente
por BASTIDAS UBATE
DORA LUCIA
Fecha: 2026.02.04
13:49:38 -05'00'

LUCÍA BASTIDAS UBATÉ

Directora

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Proyectó: Mariela Gordillo Castro-Profesiona Universitario OJ^{MCC}
Luisa Fernanda Pérez Gaitán- Abogada contratista OJ
Maria Fernanda Carrillo Pantoja- Contratista SGIEP
Revisó: Daniel Sandoval Casallas- Asesor SGIEP



**ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.**
Secretaría de Gobierno

Edgar DuarteQuiroga-Subdirector SGIEP

Geovanni Andrés Cárdenas Mogollón- Jefe Oficina Jurídica

Fecha: Nury Peralta Cardoso - Asesora de Dirección
enero -2026

MEMORANDO

180

Bogotá, D.C.

PARA: CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO
Director de Relaciones Políticas

DE: Directora Jurídica (E)

ASUNTO: Comentarios – Primer Debate - Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 *“Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá”*

Radicado: 20261700024023

Respetado Dr. Aparicio Patiño:

En atención al requerimiento realizado a esta dependencia mediante el memorando citado en el asunto, remitimos el análisis jurídico sobre el proyecto de acuerdo igualmente referenciado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del Decreto Único Sectorial No. 642 de 2025 en el formato dispuesto para hacerlo, el cual se adjunta al presente memorando.

Cordialmente,



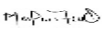
ANDREA ZHARAY OREJARENA BENÍTEZ
Directora Jurídica (E)

Anexo: Lo anunciado

Revisó: Lady Catherine Lizcano Ortiz – PE-DJ



Elaboró: Miguel Angel Ortiz Gallego – PU-DJ



FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO

SECTOR QUE CONCEPTÚA: Gobierno

ENTIDAD QUE CONCEPTÚA: Secretaría Distrital de Gobierno

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 016 AÑO:2026

1er debate X **2do debate**

TÍTULO DEL PROYECTO

“Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá.”

AUTOR (ES)

Julián Espinosa Ortiz – Partido Alianza Verde

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

Crear la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá.

COMPETENCIA LEGAL DEL CONCEJO DISTRITAL y/o ADMINISTRACIÓN DISTRITAL PARA PRESENTAR y/o APROBAR LA INICIATIVA

Análisis de Competencia Legal:

El Concejo del Distrito Capital de Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8, numeral 1 del artículo 12 y el inciso primero del artículo 13 del Decreto – Ley 1421 de 1993, (Régimen Especial para el Distrito Capital de Bogotá), se encuentra facultado para presentar el Proyecto de Acuerdo propuesto para discusión en el seno de la Corporación.

Sin embargo, conforme está planteada la iniciativa en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se advierte una asignación de funciones a varias secretarías de despacho, facultad que corresponde de manera exclusiva al Alcalde Mayor, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. Esta limitación se encuentra en armonía con lo dispuesto en el literal segundo del artículo 13 del mismo Decreto, relativo a las iniciativas de proyectos de acuerdo que son de competencia exclusiva del Alcalde, el cual señala: “*Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. (...)*”.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1998, corresponde exclusivamente al Alcalde Mayor de Bogotá la “distribución de los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas”. En ese sentido, resulta improcedente que el Concejo de Bogotá, en el marco del Proyecto de Decreto, asuma dicha

competencia al pretender efectuar la distribución de asuntos entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Integración Social, las Alcaldías Locales y la Policía Metropolitana de Bogotá, toda vez que tal atribución se encuentra reservada de manera privativa al Alcalde Mayor.

Del mismo modo, el Proyecto de acuerdo pretende la creación de una “mesa intersectorial local contra la receptación” regulando de manera detallada su funcionamiento, integración, periodicidad, funciones, presidencia y secretaría técnica, desbordando las competencias normativas del Concejo Distrital. Es de anotar que es procedente que la corporación en ejercicio de su función normativa autorice o habilite la creación de instancias generales de coordinación, pero no le es dable establecer su estructura operativa o impartir directrices administrativas concretas sobre su organización y funcionamiento, pues tales aspectos hacen parte de la potestad reglamentaria y de dirección administrativa del Alcalde Mayor.

De lo señalado se tiene que, la creación y reglamentación de mesas intersectoriales que atienden a mecanismos de coordinación administrativa, se circunscribe dentro de la función de organización interna de la administración distrital, atribuida de manera exclusiva al Alcalde Mayor conforme a las disposiciones decantadas en el artículo 315 de la Constitución Política y 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, Por lo que al definir de manera expresa las entidades que la integran, asignar roles específicos a cada una de ellas, establecer la periodicidad mínima de sus sesiones y señalar obligaciones de reporte, el Proyecto de Acuerdo incurre en una clara invasión de la esfera administrativa, configurando un vicio de competencia que compromete la legalidad de la iniciativa.

Por la anterior razón, se evidencia que el Concejo se encuentra facultado parcialmente para presentar el proyecto de acuerdo propuesto.

ES COMPETENTE

Si ☐ No ☐ Competencia Parcial ☒

ANÁLISIS JURÍDICO

En atención a la solicitud de concepto jurídico en relación con el Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026, “*Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá.*”, y con fundamento en el análisis de legalidad realizado por la Dirección Jurídica, se presentan a continuación las observaciones normativas y sugerencias de ajuste al articulado del proyecto, con el objetivo de asegurar su conformidad con el marco constitucional y legal vigente, en especial con lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, que regula la organización del Distrito Capital. Este análisis se concentra particularmente en el análisis de: i) Unidad de materia entre el articulado, ii) Concordancia entre el epígrafe y el articulado, iii) Atribuciones del Concejo de Bogotá, iv) Atribuciones del Concejo de Bogotá, Consideraciones y análisis concreto sobre el proyecto de acuerdo.

I) Unidad de materia entre el articulado

El principio de unidad de materia está consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, el cual establece que:

“Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia, y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella.”

Este principio ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, que ha señalado que su finalidad es preservar la coherencia normativa, la transparencia en el debate democrático, y la seguridad jurídica, impidiendo que se incluyan disposiciones extrañas, irrelevantes o ajenas a la temática general del proyecto.

* En la sentencia C-025 de 1993, la Corte sostuvo que la unidad de materia no exige identidad temática absoluta, pero sí que exista una conexidad razonable, causal, temática o teleológica entre los artículos del proyecto.

* En la sentencia C-539 de 1996, se aclaró que es válido que una norma tenga varias disposiciones siempre que todas guarden vínculo claro y directo con la materia predominante.

Analizado el proyecto normativo se evidencia que presenta deficiencias en la coherencia temática entre el título, objeto y articulado. Esto, atendiendo a que a pesar de que la iniciativa se orienta a la creación de una estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano, el contenido del articulado expone disposiciones disímiles relativas a inspección, vigilancia y control, gestión de servicios públicos, intervención social y comercio de reciclaje, los cuales no guardan una relación normativa directa, clara y necesaria con el objeto anunciado, desdibujando el eje temático del proyecto y afectando el cumplimiento del principio de unidad de materia.

II) Concordancia entre el epígrafe y el articulado

Al respecto el Artículo 169 de la Constitución Política: *“El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido...”*

Así también lo ha dispuesto la Corte Constitucional al señalar que *“...la exigencia de concordancia no implica una identidad literal, pero sí una coherencia lógica, temática y finalística entre el epígrafe y el contenido normativo.”*

Conforme a lo expuesto, el principio de concordancia exige que el título (epígrafe) de una norma refleje de manera clara, veraz y coherente el contenido normativo que desarrolla. Su función es garantizar la transparencia legislativa y evitar que las disposiciones se desvíen del objeto anunciado en el título, lo cual refuerza el principio de unidad de materia y facilita el control ciudadano.

Ahora bien, de acuerdo con el epígrafe Proyecto de Acuerdo, *“Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá.”*. El título del proyecto hace alusión al propósito normativo:

El propósito de este Acuerdo es anunciar la creación de una estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano; no obstante, el articulado va más allá de establecer lineamientos generales o meros criterios orientadores de dicha estrategia, por cuanto procede a incorporar disposiciones de carácter operativo y administrativo, asignando funciones específicas a entidades distritales, la regulación de acciones de inspección, vigilancia y control, fija frecuencias mínimas de operativos, crea y regula de manera detallada una mesa intersectorial, adicionalmente incluye materias que no se anuncian de manera expresa en el epígrafe, como lo es la gestión de mobiliario de servicios públicos y el comercio de reciclaje.

Partiendo de lo anterior, se infiere que el contenido normativo de la presente iniciativa no guarda una necesaria coherencia lógica, temática o finalística con el epígrafe.

III) Atribuciones del Concejo de Bogotá

El Proyecto de Acuerdo tiene como finalidad fortalecer las acciones institucionales orientadas a la prevención y mitigación del delito de receptación de autopartes, dispositivos móviles y mobiliario urbano en el Distrito Capital, mediante la adopción de una estrategia de carácter general que promueva la articulación interinstitucional y contribuya al mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana. En ese contexto, se procede a realizar el análisis jurídico del articulado presentado exponiendo a continuación las consideraciones correspondientes:

1. Duplicidad Normativa

Procediendo de manera inicial sobre la validación de normativa existente que regule aspectos contenidos en el Proyecto de Acuerdo presentado, se advierte que la iniciativa se inscribe dentro de un marco normativo distrital, el cual previamente contaba con desarrollo, como bien se observa en los Acuerdos Distritales 397 de 2009 y 796 de 2021, que regulan de manera parcial asuntos relacionados con la seguridad, la convivencia y la prevención de conductas delictivas que afectan el patrimonio económico de los ciudadanos. Previendo lo anterior, es posible observar que el contenido del Proyecto de Acuerdo no cuenta con una regulación completamente novedosa, ya que reproduce objetivos, enfoques y mecanismos, cuyas disposiciones vigentes ya desarrollan, configurando de esta manera un escenario de duplicidad normativa.

Ahora bien, también es posible observar que la duplicidad que se presenta no se restringe a un plano material de las medidas propuestas, ya que a su vez, se extiende al diseño institucional que plantea la iniciativa, como lo es la creación o formalización de instancias de articulación, coordinación y seguimiento en materia de seguridad y convivencia, las cuales en la actualidad cuentan con asignación a órganos existentes dentro de la estructura administrativa del Distrito Capital, y descendiendo al caso en particular, lo es el Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia, que se encuentra conformó y reguló debidamente mediante el Decreto Distrital 657 de 2011, hoy derogado y compilado en los artículos 137 a 159 del Decreto Único Sectorial 644 de 2025, como instancia encargada de la coordinación interinstitucional en esta materia.

Del mismo modo, es imperioso validar que el régimen jurídico vigente atribuye al Alcalde o Alcaldesa Mayor de Bogotá la competencia para la creación de instancias de coordinación, consejos, comités y demás espacios interinstitucionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Acuerdo Distrital

257 de 2006, por lo que incorporar disposiciones que ordenen o estructuren nuevas instancias desde el Concejo Distrital lo que genera tensiones con el marco competencial existente, superponiendo funciones ya asignadas, alterando la distribución de competencias prevista por la normativa distrital.

La anterior premisa, cuenta con el respaldo decantado por la interpretación adoptada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 00051 del 30 de julio de 2019 respecto del cuestionamiento:

“1. ¿Es competente el Concejo de Bogotá D.C., para presentar por su propia iniciativa proyectos de acuerdo para la creación de instancias de coordinación, tales como comités (sectoriales, intersectoriales y locales), consejos (sectoriales, intersectoriales, locales y consultivos) mesas distritales, juntas y comisiones para el ejercicio de funciones de concertación, estructuración, seguimiento y articulación de políticas distritales y locales, así como de articulación y ejecución de estrategias, planes y programas que se desarrollen en el distrito Capital o en cada una de las 20 localidades?”

Respondiendo: *“El Concejo de Bogotá D.C. no puede por iniciativa propia presentar proyectos de acuerdo para la creación de instancias de coordinación, concertación, seguimiento, articulación, estructuración y de ejecución de estrategias, tales como comités, consejos, mesas, juntas y comisiones.”*

En ese sentido, se infiere que el Concejo de Bogotá D.C. no cuenta con habilitación para crear, por iniciativa propia, instancias de coordinación, concertación, articulación o ejecución de estrategias distritales. Por tanto, cuando una iniciativa normativa incorpora disposiciones que replican instancias ya existentes o introducen esquemas de coordinación paralelos, se configura no solo una duplicidad institucional, sino también un riesgo de desarticulación del modelo administrativo vigente.

En resumen, aunque el Proyecto de Acuerdo va de la mano con los objetivos generales de fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, su formulación actual resulta en una superposición normativa e institucional frente a disposiciones y órganos con existencia previa en el ordenamiento distrital, circunstancia que hace necesario validar la pertinencia de mantener regulaciones paralelas, generando posibles conflictos competenciales y fragmentación en la implementación de la política pública de seguridad.

2. Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°:

Analizando el proyecto de manera conjunta, se expone que de manera transversal y reiteradamente, se transgrede la órbita competencial atribuida constitucional y legalmente al Alcalde Mayor de Bogotá, ya que el articulado no se limita a establecer lineamientos generales o criterios orientadores de política pública, yendo más allá, asignando funciones específicas y concretas a diversas secretarías de despacho, entidades distritales y autoridades locales, donde a su vez determina la forma en que deben coordinarse, operar y ejecutar acciones administrativas.

Es de esta manera que, a través de disposiciones contenidas a lo largo del proyecto se imponen obligaciones a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a la Secretaría Distrital de

Gobierno, a las Alcaldías Locales y a otras entidades del nivel central y descentralizado, señalando expresamente actividades, responsabilidades, mecanismos de coordinación y frecuencias mínimas de actuación, desconociendo lo que dispone el artículo 315 de la Constitución Política, en consonancia con el artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, ya que solo en cabeza del Alcalde Mayor de Bogotá, recae la atribución de dirigir la acción administrativa del Distrito, distribuir los negocios entre las entidades distritales y ejercer la potestad reglamentaria necesaria para la ejecución de los acuerdos.

Del mismo modo, el Proyecto de Acuerdo incurre nuevamente en una extralimitación de la competencia del Concejo Distrital, al momento en que dispone la creación de una mesa intersectorial, continuando con su reglamentación detallada, donde define funciones, integración, roles específicos, periodicidad de sesiones, obligaciones de reporte y aspectos logísticos para su funcionamiento. En la medida en que integra a la propuesta este tipo de determinaciones, no se están constituyendo meras habilitaciones normativas, por cuanto se procede a la configuración de una regulación completa respecto de un mecanismo de coordinación administrativa, cuya creación, organización y puesta en marcha se enmarcan dentro de la potestad de dirección y organización interna de la administración distrital, atribuida de manera privativa al Alcalde Mayor.

Así las cosas, se tiene en primera medida que el Concejo de Bogotá se encuentra facultado para expedir acuerdos de carácter general y para autorizar la adopción de estrategias o instancias de coordinación en el marco de sus competencias, pero no le es jurídicamente viable sustituir al Alcalde Mayor en la definición de la estructura operativa, funcional y organizacional de la administración distrital, configurando un vicio de competencia que compromete la legalidad de la iniciativa en su conjunto.

3. Artículo 1°:

De lo evidenciado en el presente artículo y más allá de los reparos en materia competencial, este presenta aspectos que requieren revisión y ajuste del punto de vista de la técnica normativa y de la necesidad regulatoria. Lo señalado, atendiendo en primera instancia al uso inadecuado de la figura del párrafo, al momento en que la misma se emplea para introducir definiciones conceptuales dentro de un marco general. Conforme a los criterios de técnica legislativa, los párrafos guardan una función accesoria en relación con el contenido principal del artículo, la que pretende precisar su alcance, establecer excepciones o aclarar su aplicación, alejándose necesariamente de la función de definiciones autónomas que no guardan una relación directa y funcional con la disposición principal.

Con lo señalado, se observa que las definiciones contenidas en los párrafos 1 a 4 no resultan indispensables ni justificadas, ya que los conceptos de autopartes, dispositivos móviles y receptación cuentan con desarrollo normativo previo en el ordenamiento jurídico nacional, resultando así en una reiteración innecesaria, soslayando los principios de economía y racionalidad normativa, sin que se expongan razones que justifiquen la creación de definiciones propias en el ámbito distrital.

Por otro lado, de la validación realizada de las definiciones respecto de “mobiliario urbano y al mobiliario de servicios públicos”, se observa un grado de indeterminación en las mismas, por cuanto sobre ellas se utilizan expresiones amplias e imprecisas como “otros elementos” o “demás elementos

necesarios”, lo que no permite observar que sobre ellas existan criterios objetivos que permitan delimitar su alcance, afectando así la seguridad jurídica que requieren este tipo de actos, dando paso a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades encargadas de la aplicación de la norma, resultando incompatible con la necesidad de claridad y certeza que debe mediar sobre las disposiciones.

Siguiendo la línea del inicio anterior, cuando se procede a introducir definiciones sobre bienes asociados al espacio público y a la prestación de servicios públicos, se desconoce que dichos bienes se encuentran sujetos a regímenes jurídicos específicos y, seguido a ello, existen escenarios en que los mismos se encuentran bajo la administración de entidades descentralizadas o empresas de servicios públicos, cuyas competencias y responsabilidades se encuentran definidas por normas de superior jerarquía.

4. Artículo 2°

Validado el Artículo en cuestión, primigeniamente se debe señalar que este no cuenta con elementos “elementos constitutivos de la estrategia”, ya que al observar en detalle cada numeral de la disposición, estos corresponden a un conjunto de órdenes operativas, procedimientos administrativos y actuaciones de control, careciendo de una definición previa, clara y normativa de la estrategia misma, permitiendo prever en ese sentido la ausencia de lineamientos generales, objetivos, alcances o criterios de la estrategia, descendiendo directamente a describir actividades concretas de gestión y operación, desnaturalizando el contenido propio de un acuerdo distrital.

Partiendo de la premisa anterior se evalúan los numerales establecidos, de los que particularmente se señala:

- **Numeral Primero:** El señalado, establece de manera indeterminada y sin claridad sobre su concepto, la tarea que nombra como “priorizará las zonas” dejando a un lado el señalamiento del tipo de zonas a las que se refiere, sus criterios normativos, o los efectos jurídicos concretos con los que se debe realizar dicha priorización, procediendo posteriormente a mezclar referencias a zonas de riesgo por hurto, zonas de comercio, talleres mecánicos y actividades de reciclaje, impidiendo identificar si se trata de una categorización territorial, económica, operativa o de intervención institucional.

Por lo señalado, es posible que al no existir una claridad sobre las zonas de priorización se genere un margen excesivo de discrecionalidad administrativa, afectando la certeza jurídica de la norma al ser ausentes parámetros objetivos, verificables o evaluables que permitan comprender el propósito, alcance y consecuencias de dicha medida.

- **Numeral Segundo:** Dentro del presente, se imparte la obligación de llevar un “detallado listado” de establecimientos comerciales, talleres, bodegas de reciclaje y zonas donde se realicen dichas actividades de manera ilegal, omitiendo precisar la finalidad, naturaleza, alcance o efectos jurídicos del mismo, por lo que no se evidencia en su definición si este corresponde a un instrumento que se enlace con un fin específico, bien sea informativo, preventivo, de control, sancionatorio o investigativo, siendo impreciso en establecer la necesidad de ese elemento.

Consecuentemente, es preciso evidenciar la confusión normativa que se presenta mezclar actividades económicas lícitas con referencias a actividades ilegales, dejando a un lado diferenciación clara entre unas y otras, pudiendo generar riesgos de estigmatización y afectación indirecta al buen nombre y a la libertad de empresa.

Finalmente, se debe precisar que el tratamiento de conductas presuntamente ilícitas cuenta con un marco penal y policivo específico, por lo que resulta improcedente y carente de sustento jurídico la creación de listados administrativos sobre actividades ilegales, sin sujeción a procedimientos legalmente establecidos.

- **Numeral Tercero:** Dentro de lo analizado, al disponer la creación de un archivo actualizado que contenga la información completa de los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), pretendiendo realizar un seguimiento a las medidas correctivas aplicadas y garantizar su posterior traslado a las inspecciones de policía, se parte de un supuesto errado, en la medida en que los operativos de IVC son desarrollados atendiendo a procedimientos administrativos previamente establecidos, los cuales contemplan la participación directa de las inspecciones de policía y consecuentemente la adopción inmediata de medidas correctivas cuando a ello haya lugar.

En ese sentido, y previendo la observancia del archivo y control de los operativos que se adelanten, se traduce a su vez en una duplicidad innecesaria que desconocería los mecanismos de articulación y gestión documental que en la actualidad rigen la actuación administrativa, por cuanto la información derivada de los operativos de IVC debe ser registrada, archivada y tramitada atendiendo las reglas vigentes de procedimiento y archivo, por lo que en ese sentido, lo dispuesto en el numeral reitera obligaciones preexistentes que generarían confusión sobre el flujo procedimental.

- **Numerales Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo:** Los enunciados dentro de su contenido establecen directrices de tipo eminentemente operativo, logístico y procedimental, cuando imponen la forma en que debe versar la coordinación interinstitucional, la periodicidad de los operativos, la disposición de recursos materiales y la obligación de rendir informes periódicos, lo que corresponde a la gestión administrativa y operativa de la administración distrital, y no a la función normativa general que recae en las facultades con las que el Concejo de Bogotá es investido para desarrollar mediante Acuerdos Distritales.

Por lo anterior, las disposiciones que se enlistan desbordan la competencia del Concejo Distrital e invaden atribuciones propias del Alcalde Mayor y de las entidades del nivel central, en particular aquellas relacionadas con la dirección de la administración, la organización del servicio y la definición de planes, programas y acciones operativas.

- **Numeral Octavo:** Al disponer articulación de acciones con los entes investigadores con el fin de impactar estructuras delincuenciales dedicadas a la receptación, resulta jurídicamente improcedente desde la competencia del Concejo Distrital, ya que las funciones de investigación penal y persecución del delito son ejercidas por dichas autoridades con autonomía constitucional

y legal, conforme al sistema penal acusatorio, sin sujeción a lineamientos operativos impartidos por órganos de representación política del orden territorial.

No obstante, la disposición regula actuaciones que ya se desarrollan en el marco de los mecanismos ordinarios de coordinación interinstitucional existentes, por lo que en ese sentido, no le es dable a un Acuerdo Distrital imponer directrices, condiciones o finalidades a autoridades nacionales de investigación penal.

5. Artículo 3°:

De lo observado en la disposición, se evidencia una redundancia respecto del contenido del numeral 8 del artículo 2 del mismo Proyecto de Acuerdo, cuando dispone la articulación de acciones con los entes investigadores buscando la prevención del delito de receptación, contando con la variación respecto de la fijación de una periodicidad mínima en la realización de dichas acciones, sin aportar un contenido normativo nuevo o que justifique la reiteración de la disposición.

Por otra parte, el artículo incurre en una imprecisión conceptual relevante, cuando dirige su atención a “acciones de control” que cuenten con coordinación con autoridades de investigación penal, cuyas funciones no corresponden al control administrativo, por ser estas enmarcadas en labores de policía judicial e investigación, que se ejercen con autonomía constitucional y legal.

De otro modo, imponer una periodicidad mínima dentro de la disposición, evidencia una rigidez operativa injustificada, que del mismo modo no tiene en cuenta la naturaleza estratégica, flexible y dinámica de las actuaciones en materia de seguridad ciudadana e investigación penal, por lo que definir frecuencias, metodologías y prioridades operativas, recaen en la gestión administrativa y a los análisis técnicos de las entidades competentes, más no a una regulación de carácter normativo general.

6. Artículo 5° y 6°:

Los analizados dentro del presente punto, desarrollan detalladamente las funciones, la periodicidad de sesiones, la logística y la conformación de lo que se denomina en la disposición como “mesa intersectorial local contra la receptación”, configurando de manera directa una reglamentación integral de un órgano de coordinación administrativa, lo cual, excede la competencia del Concejo Distrital, ya que no existe limitación respecto de autorizar o reconocer un espacio de articulación, sino que de manera adicional diseña su estructura, asigna funciones específicas, define su funcionamiento interno, establece obligaciones periódicas y determina las entidades que deben integrarlo, lo cual, constituye facultades que corresponden de manera exclusiva al Alcalde Mayor en su calidad de suprema autoridad administrativa del Distrito.

En ese escenario, asignar funciones de seguimiento, priorización, coordinación intersectorial, citación de entidades distritales, capacitación de actores sociales y rendición periódica de informes, se encuentra enmarcado en una distribución material de competencias administrativas entre dependencias y entidades del nivel central, local y nacional, aspecto que se encuentra reservado al Ejecutivo distrital conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993.

Seguido a ello, se desconoce la autonomía funcional y organizacional de entidades distritales y de la Policía Nacional, en la medida en que el artículo 6° impone su participación obligatoria en una instancia creada por el Concejo. En ese sentido determinar a su vez delegados, roles internos como la presidencia del espacio y la secretaría técnica, como también la vinculación permanente de entidades específicas, constituye una decisión de organización administrativa que solo puede adoptarse por el Alcalde Mayor mediante los instrumentos de dirección y coordinación administrativa correspondientes.

IV) Fundamento constitucional, legal y reglamentario

El proyecto de acuerdo No. 016 de 2026, encuentra su fundamento legal y constitucional en las normas que a continuación se enuncian:

- Constitución Política, Artículo [1](#), [2](#), [22](#), [95](#), [209](#), [250](#), [287](#), [315](#)
- Ley [62](#) de 1993¹
- Ley [489](#) de 1998²
- Ley [599](#) de 2000³
- Ley [906](#) de 2004⁴
- Ley [1453](#) de 2011⁵
- Ley [1801](#) de 2016⁶
- Decreto Nacional [3110](#) de 2007⁷

Normas Distritales

- Acuerdo Distrital [257](#) de 2006⁸
- Acuerdo Distrital [397](#) de 2009⁹
- Acuerdo Distrital [796](#) de 2021¹⁰
- Decreto [644](#) de 2025¹¹

Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo a la validación del Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026, “*Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá.*”, de conformidad al asidero jurídico que enmarca el presente, se considera **No Viable**.

¹ Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República

² Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones

³ Por la cual se expide el Código Penal

⁴ Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

⁵ Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad

⁶ Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

⁷ por el cual se crea el Consejo Nacional de lucha contra el hurto de vehículos, partes, repuestos y modalidades conexas.

⁸ Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones

⁹ Por medio del cual se crea el censo de establecimientos dedicados a la comercialización de autopartes usadas

¹⁰ Por medio del cual se crea el Sistema Distrital de Información y Seguimiento de Hurto de Bicicletas y Teléfonos Celulares

¹¹ Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

En todo caso, la viabilidad en relación con la iniciativa queda condicionado al concepto que emita el sector coordinador que para el caso corresponde al Sector Seguridad, Convivencia y Justicia.

ANÁLISIS TÉCNICO

N/A

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

El Proyecto de Acuerdo presenta observaciones respecto de su contenido normativo, que implican la necesidad de modificación en su articulado, por las siguientes razones:

- Duplicidad normativa

Dentro de lo analizado en la iniciativa, se tiene que esta se inscribe en un marco normativo distrital que cuenta con desarrollo previo, el cual se evidencia en regulaciones como los Acuerdos Distritales 397 de 2009 y 796 de 2021, los que de manera parcial definen aspectos relacionados con la seguridad, la convivencia y la prevención de conductas que afectan el patrimonio económico de los ciudadanos. En ese sentido, el Proyecto de Acuerdo previsto, no genera una regulación novedosa, ya que reproduce objetivos, enfoques y mecanismos que ya cuentan con disposiciones vigentes, configurando así un escenario de duplicidad normativa que se extiende, al diseño institucional propuesto, al contemplar instancias de articulación y coordinación que actualmente se encuentran asignadas a órganos existentes, como el Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia, regulado en el Decreto Único Sectorial 644 de 2025.

Del mismo modo, es necesario considerar que el ordenamiento jurídico distrital atribuye al Alcalde o Alcaldesa Mayor la competencia para la creación de instancias de coordinación interinstitucional, conforme al artículo 39 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, posición que se reitera por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

- Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°

Del análisis integral del Proyecto de Acuerdo se evidencia, de manera transversal y reiterada, una extralimitación en la órbita competencial del Concejo Distrital, en tanto el articulado no se limita a fijar lineamientos generales u orientadores de política pública, sino que asigna funciones concretas, define mecanismos de coordinación, establece obligaciones operativas y fija periodicidades de actuación para distintas secretarías, entidades distritales y autoridades locales. Estas disposiciones desconocen que, conforme al artículo 315 de la Constitución Política y al artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, corresponde de manera privativa al Alcalde Mayor dirigir la acción administrativa del Distrito, distribuir los negocios entre las entidades y ejercer la potestad reglamentaria necesaria para la ejecución de los acuerdos, configurándose así un vicio de competencia que compromete la legalidad del proyecto en su conjunto.

- Artículo 1°

El artículo presenta uso inadecuado de la figura del párrafo para introducir definiciones conceptuales autónomas, las cuales no cumplen una función accesorio o aclaratoria del contenido principal del artículo. Adicionalmente, varias de las definiciones incorporadas resultan innecesarias al reiterar conceptos ya desarrollados en el ordenamiento jurídico nacional, mientras que otras presentan un alto grado de indeterminación mediante el uso de expresiones amplias e imprecisas, afectando la seguridad jurídica y desconociendo que los bienes asociados al espacio público y a los servicios públicos se encuentran sujetos a regímenes jurídicos especiales definidos por normas de superior jerarquía.

- Artículo 2°

Este carece de una formulación normativa clara de la “estrategia” que pretende crear, pues sin definir objetivos, alcances o lineamientos generales, desciende directamente a la descripción de órdenes operativas, procedimientos administrativos y actuaciones de control, desnaturalizando el contenido propio de un acuerdo distrital. A ello se suma la indeterminación de conceptos clave, la mezcla de actividades lícitas con referencias a conductas ilegales, la creación injustificada de listados administrativos sin finalidad definida y la reiteración de obligaciones procedimentales ya existentes, lo que genera riesgos de discrecionalidad, duplicidad administrativa y confusión normativa, además de invadir competencias propias del Ejecutivo distrital y de autoridades de investigación penal.

- Artículo 3°

La disposición resulta redundante frente al numeral 8 del artículo 2 del mismo Proyecto, al reiterar la articulación con entes investigadores, introduciendo únicamente una periodicidad mínima sin aportar un contenido normativo nuevo que justifique su inclusión. Asimismo, incurre en una imprecisión conceptual al referirse a “acciones de control” en coordinación con autoridades de investigación penal, cuyas funciones no corresponden al control administrativo, sino a labores de policía judicial ejercidas con autonomía constitucional y legal. La fijación de frecuencias mínimas introduce una rigidez operativa injustificada que desconoce la naturaleza técnica, estratégica y flexible de las actuaciones en materia de seguridad ciudadana.

- Artículos 5° y 6°

Los artículos configuran una reglamentación integral y detallada de la denominada “mesa intersectorial local contra la receptación”, al definir sus funciones, integración, roles internos, periodicidad de sesiones, obligaciones de reporte y aspectos logísticos, lo cual excede la competencia del Concejo Distrital. En lugar de una habilitación normativa general, el proyecto diseña la estructura y funcionamiento de un órgano de coordinación administrativa, asignando funciones específicas y vinculando obligatoriamente a entidades distritales y a la Policía Nacional, desconociendo la autonomía funcional y organizacional de dichas entidades y usurpando atribuciones reservadas al Alcalde Mayor en materia de dirección, organización interna y distribución de competencias administrativas.

¿GENERA GASTOS ADICIONALES EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD?

Si ☒ No ☐

VALORACIÓN DEL GASTO. En caso de ser afirmativa la respuesta de generación de gastos indique ese gasto adicional a que corresponde.

De lo validado en el aparte de impacto fiscal dentro del documento de exposición de motivos, se evidencian aspectos meramente enunciativos, en la medida en que solo se afirma, de forma genérica, que el Proyecto de Acuerdo “no genera ningún impacto fiscal adicional” y que su implementación se realizará con el presupuesto actual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, sin señalar elementos objetivos, verificables que sustenten dicha afirmación.

De lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, se estima la exigencia de que toda iniciativa normativa que pueda implicar la ejecución de acciones, programas o estrategias por parte de la administración cuente con una estimación clara y concreta de su impacto fiscal, así como con la identificación de las fuentes de financiación y la capacidad institucional para asumirlas. Ahora bien, elevándolo a lo que se considera dentro del presente escenario, se observa que dentro de la iniciativa se contempla la creación de una estrategia, la coordinación interinstitucional, la realización periódica de operativos, la elaboración de informes, la disposición de recursos logísticos y la puesta en funcionamiento de instancias de articulación, lo que razonablemente supone la destinación de recursos humanos, técnicos y operativos que no son analizados ni cuantificados en la justificación dispuesta en la exposición de motivos del Proyecto.

No obstante, a continuación, se realiza un análisis de aspectos que podrían generar un impacto fiscal, que emanen de la aplicación del proyecto así:

- Artículo 1º: Se genera impacto fiscal en la medida en que se ordena la creación de una estrategia distrital contra la receptación, cuya implementación supone el desarrollo de actividades de planeación, coordinación interinstitucional, seguimiento y ejecución permanente. Estas actuaciones implican necesariamente la asignación y utilización de recursos humanos, técnicos y administrativos por parte de las entidades responsables, así como la adecuación de capacidades operativas y de gestión institucional, lo que conlleva efectos presupuestales asociados a la operación, articulación y sostenibilidad de la estrategia en el tiempo.
- Artículo 2º: Dentro del presente, se establecen múltiples obligaciones operativas que implican la ejecución de actividades permanentes y periódicas, tales como priorización de zonas, elaboración de listados y archivos administrativos, realización de operativos de control mensuales y semanales, disposición de recursos logísticos, como lo podrían ser transporte, bodegas, almacenamiento, entre otros, además de la coordinación con autoridades policiales y de investigación, las cuales conllevan costos asociados a personal, logística, movilidad, almacenamiento y gestión administrativa.
- Artículo 3º: La disposición genera impacto fiscal al establecer la realización de acciones de control con una periodicidad mínima de dos veces al mes, articuladas con entes investigadores, lo cual implica una programación recurrente de actividades operativas que demandan la asignación continua

de recursos humanos, técnicos y logísticos. Dichas actuaciones suponen la disponibilidad permanente de personal, coordinación interinstitucional, uso de medios operativos y apoyo administrativo, generando efectos presupuestales asociados a su ejecución.

Pueden ser atendidas por el Presupuesto del Sector

Si _____ No _____

VIABILIDAD DEL PROYECTO (Señalar con X la opción adecuada)

Viable _____

Viable sujeto a comentarios y/o modificaciones al articulado _____

No Viable X

Comentarios adicionales sobre la viabilidad del proyecto de Acuerdo:


Consideramos pertinente manifestar, que la Dirección Jurídica no es competente para pronunciarse sobre el impacto fiscal que pueda generar el presente Proyecto de Acuerdo, pues su análisis se centra en razones jurídicas y de aquiescencia con el marco legal aplicable.

Atentamente,



ANDREA CHARAY OREJARENA BENÍTEZ
Directora Jurídica (E)

Elaboró: Miguel Ángel Ortiz Gallego 

Revisó: Lady Catherine Lizcano Ortiz 

MEMORANDO

(200)
Bogotá D.C.

PARA: CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO
Director de Relaciones Políticas

DE: EDUARDO ANDRÉS GARZÓN TORRES
Subsecretario de Gestión Local

ASUNTO: Pronunciamento para primer debate – Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026
Radicado: 20261700024033

Cordial saludo.

En atención al memorando citado en la referencia, mediante el cual se solicita pronunciamento para primer debate sobre el Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 “Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá”, esta Subsecretaría procede a emitir el concepto correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 457 del Decreto Distrital 642 de 2025.

COMPETENCIA Y ANÁLISIS TÉCNICO:

I. ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Frente a la competencia del Concejo de Bogotá, le corresponde “Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”, de conformidad con lo estipulado en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el cual establece dentro de las atribuciones del Concejo Distrital:

“(…) 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.”

En ese sentido, el Concejo Distrital tiene competencia normativa general para expedir acuerdos que desarrollen políticas públicas y establezcan marcos regulatorios que orienten la acción administrativa distrital.

No obstante, el mismo Decreto Ley 1421 de 1993 delimita el ámbito funcional del Ejecutivo Distrital. El numeral 3 del artículo 38 (ídem) dispone que corresponde al Alcalde Mayor:

“(…) 3. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito.”

Esta disposición se encuentra en armonía con el artículo 315 de la Constitución Política, que establece que el alcalde es la máxima autoridad administrativa en su respectiva entidad territorial y le corresponde dirigir la acción administrativa, asegurar el cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo. En efecto, el alcalde actúa como representante legal de la entidad territorial, administra los recursos públicos, garantiza la ejecución del presupuesto y orienta la implementación de políticas y estrategias dentro del marco constitucional y legal.

En consecuencia, si bien el Concejo puede dictar normas generales en materia de seguridad, convivencia y protección del patrimonio público, la dirección concreta de la acción administrativa, la determinación de operativos específicos, la asignación de cargas operativas a dependencias distritales y locales, y la estructuración de instancias permanentes de coordinación corresponden al ámbito funcional del Alcalde Mayor como director de la administración distrital.

Bajo esta perspectiva, del examen integral del articulado del Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 se observa que la iniciativa no se limita a establecer lineamientos generales de política pública, sino que incorpora mandatos operativos concretos y permanentes dirigidos a entidades del nivel central y a las Alcaldías Locales, tales como:

- La realización obligatoria de operativos mensuales y semanales con frecuencia mínima definida.
- La elaboración de listados detallados de establecimientos y archivos actualizados de operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC).
- La rendición de informes trimestrales al Consejo Local de Seguridad.
- La disposición de recursos logísticos por parte de las Alcaldías Locales (transporte, carga y bodegaje).
- La creación de una “mesa intersectorial local contra la receptación” con integración obligatoria y periodicidad mínima de sesiones.

Estas disposiciones trascienden el ámbito normativo abstracto y se sitúan en el campo de la dirección y organización concreta de la acción administrativa distrital, en tanto establecen cómo, cuándo y con qué periodicidad deben ejecutarse determinadas actuaciones, además de imponer cargas logísticas específicas. En consecuencia, al crear una instancia administrativa permanente y asignar cargas operativas específicas a entidades distritales y locales, el proyecto presenta un reparo sustancial de competencia e iniciativa, pues este tipo de determinaciones deben originarse en el Ejecutivo Distrital, en ejercicio de la función constitucional y legal de dirigir la acción administrativa y asegurar la prestación eficiente de los servicios a cargo del Distrito.

Por ultimo Sobre este particular, el Consejo de Estado, mediante el fallo 177 de 2016, señaló que:

“(…) la Constitución reconoce expresas facultades normativas a los Concejos Municipales en ámbitos cruciales de la vida local. Por ejemplo, según el artículo 313 de la Constitución, les corresponde reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios, dictar normas orgánicas del presupuesto, reglamentar los usos del suelo y dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del . En virtud de estas atribuciones, las decisiones y acuerdos municipales adquieren el carácter de reglamentos jurídicos administrativos de contenido normativo, general, impersonal y abstracto, cuya fiscalización ha sido confiada a la justicia contencioso-administrativa.”

En la misma línea, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha establecido que la regulación operativa de detalle para el ejercicio de actividades administrativas, mediante las cuales se cumplen las funciones en las

entidades del Distrito, desborda la competencia del Concejo Distrital (Fallo 658 de 2011, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio).

Argumento que ha sido reiterado por dicho tribunal al analizar objeciones de legalidad respecto a un proyecto de acuerdo que tenía como propósito asignar funciones específicas a una entidad distrital, indicando lo siguiente:

“Para la Sala el contenido de los dos artículos antes señalados busca crear una obligación específica en cabeza de dos entidades distritales, en relación con la forma como deben prestar el servicio de suministro de alimentos en los comedores comunitarios y amigos, particularmente, con la publicidad de los menús ofrecidos, lo cual, se traduce en una imposición de una forma de ejecución o gestión del servicio, situación que desborda el ejercicio de las competencias atribuidas al Concejo, en la medida que, invade las facultades constitucionales y legales que el alcalde tiene para gestionar asuntos a su cargo, como lo es el asegurarla prestación de un servicio público y el modo en que se presta el mismo”

ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE ACUERDO

El Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 tiene como finalidad la creación de una estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá, sustentándose en disposiciones constitucionales relativas a los fines esenciales del Estado, la protección de bienes y la garantía de la convivencia pacífica. Desde el punto de vista material, la finalidad del proyecto resulta legítima y acorde con el artículo 2 de la Constitución Política, que impone a las autoridades el deber de proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes, así como asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Asimismo, la lucha contra la receptación se encuentra tipificada en el Código Penal (Ley 599 de 2000) como conducta punible, lo cual evidencia que se trata de un fenómeno delictivo que impacta directamente la seguridad ciudadana y el patrimonio público y privado.

ARTÍCULO 447. RECEPTACIÓN. <Artículo modificado por el artículo [45](#) de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Si la conducta se realiza sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos; o sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión, o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, la pena será de seis (6) a trece (13) años de prisión y multa de siete (7) a setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Ahora bien, en el ámbito nacional existen antecedentes normativos que han contemplado mecanismos de coordinación interinstitucional para enfrentar mercados ilícitos conexos al hurto. En particular, el Decreto Nacional 3110 de 2007 creó el Consejo Nacional de lucha contra el hurto de vehículos, partes y modalidades conexas, y previó la posibilidad de establecer instancias territoriales de coordinación para implementar la política pública correspondiente. Este referente normativo confirma que el ordenamiento jurídico reconoce la necesidad de mecanismos articulados entre entidades para combatir fenómenos asociados a la cadena delictiva del hurto y la comercialización ilegal de bienes. Sin embargo, debe precisarse que la existencia de estos antecedentes no implica que cualquier órgano territorial pueda, por iniciativa propia, crear estructuras administrativas permanentes con integración obligatoria y funciones operativas definidas.

En el caso del Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026, el articulado no se limita a formular una estrategia en términos programáticos o de lineamientos, sino que estructura un esquema operativo detallado que incluye la creación de una mesa intersectorial local, la determinación de su integración permanente, la fijación de periodicidades mínimas de sesiones y la imposición de obligaciones concretas de ejecución a entidades distritales y locales.

Así, aunque el propósito de fortalecer la articulación institucional para combatir la receptación es jurídicamente legítimo y se enmarca en los fines constitucionales de seguridad y protección del patrimonio, el instrumento normativo adoptado —en su configuración actual— introduce determinaciones propias de la organización interna y operativa de la administración distrital. En consecuencia, el alcance real de la iniciativa excede la mera definición de política pública y se aproxima a la estructuración administrativa.

CONSIDERACIONES SOBRE CREACIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

1. Requisitos para la creación de nuevas instancias de participación o coordinación

De conformidad con el artículo 45 del Decreto Distrital 606 de 2023, la creación de nuevas instancias distritales o locales de participación o coordinación requiere el cumplimiento de requisitos mínimos orientados a garantizar coherencia institucional, viabilidad técnica y sostenibilidad operativa. Entre ellos se destacan:

1. Concepto de viabilidad técnica, jurídica y financiera emitido por la entidad competente, que garantice el funcionamiento de la instancia.
2. Aprobación por parte del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC), cuando se trate de instancias de participación.
3. Coherencia en objeto, integrantes, funciones y alcance, asegurando que no se dupliquen instancias existentes.
4. Plan de acompañamiento y sostenibilidad técnica y operativa a cargo de la entidad proponente.

Si bien la “mesa intersectorial local contra la receptación” prevista en el Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 no se denomina formalmente instancia de participación ciudadana, sí configura una nueva instancia de coordinación interinstitucional con integración permanente, funciones definidas y periodicidad mínima obligatoria. En ese sentido, su creación debe observar los principios de racionalización institucional, no duplicidad y sostenibilidad operativa.

Del análisis del proyecto no se evidencia estudio técnico que soporte su necesidad frente a instancias ya existentes (Consejos Locales de Seguridad, comités operativos, espacios intersectoriales), ni concepto previo de viabilidad técnica, jurídica y financiera que garantice su funcionamiento efectivo. Esta ausencia refuerza el riesgo de duplicidad institucional y de generación de cargas operativas sin soporte técnico suficiente.

2. Asignación de funciones a Alcaldías Locales y entidades distritales

Al momento de asignar funciones a las Alcaldías Locales, debe observarse lo dispuesto en el artículo 149 del Decreto Distrital 642 de 2025, el cual establece que cualquier asignación funcional debe estar precedida de un estudio de capacidad institucional que permita determinar si las Alcaldías Locales cuentan con los recursos humanos, técnicos y financieros para asumirlas.

En el Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026, se asignan a las Alcaldías Locales obligaciones concretas y periódicas, tales como llevar listados detallados de establecimientos, mantener archivos actualizados de operativos IVC, disponer recursos logísticos para operativos (transporte, carga y bodegaje), y coordinar la logística de la mesa intersectorial local contra la receptación. Estas obligaciones no se presentan como lineamientos generales, sino como mandatos específicos de ejecución, con periodicidad definida y carga operativa directa. En consecuencia, constituyen en la práctica una asignación funcional que, conforme al artículo 149 del Decreto 642 de 2025, solo puede realizar el Alcalde Mayor mediante acto administrativo debidamente soportado en estudios técnicos de capacidad institucional.

Adicionalmente, conforme al Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993), el Concejo Distrital no puede asignar o adicionar funciones específicas a las entidades u organismos que conforman la administración distrital cuando dichas funciones se sitúan en el ámbito de la dirección administrativa. Esta competencia es exclusiva del Alcalde Mayor, en virtud del artículo 13 del Estatuto y del numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política, que le atribuyen la dirección de la acción administrativa y la responsabilidad de asegurar la prestación de los servicios a cargo del Distrito.

En este orden de ideas, los artículos 3, 4, 5 y 6 del proyecto de acuerdo exceden la competencia del Concejo Distrital, en la medida en que no se limitan a formular lineamientos de carácter general, impersonal y abstracto, sino que imponen obligaciones específicas, detalladas y periódicas a determinadas entidades y organismos del Distrito, configurando una invasión del ámbito funcional propio del Ejecutivo Distrital.

En consecuencia, la configuración actual del proyecto pone en riesgo su viabilidad jurídica, al afectar el principio de separación funcional entre órgano normativo (Concejo) y órgano ejecutivo (Alcalde Mayor), y al desconocer las reglas vigentes sobre asignación de funciones a las Alcaldías Locales y creación de nuevas instancias de coordinación.

3. Armonización con el plan de desarrollo distrital “Bogotá camina segura” 2024–2027

En particular, el numeral 8.3 del Plan —Programa 3. “Desmantelamiento de estructuras criminales y delincuenciales con mejores capacidades y activos tecnológicos”— establece de manera expresa que el Distrito implementará esfuerzos para la documentación de dinámicas del crimen, identificación de estructuras criminales, desarrollo de capacidades para su desmantelamiento y estrategias dirigidas al cierre de espacios que

permitan su supervivencia. Dentro de dicho programa se contemplan acciones encaminadas a mitigar el mercado asociado a estructuras criminales de hurto a celulares para el control del delito de receptación, incluyendo el énfasis en inteligencia y persecución criminal respecto de las rentas ilícitas y el lavado de activos, en coordinación con organismos policiales, militares y judiciales dentro del marco de sus competencias.

Asimismo, el programa prevé la consolidación de un modelo de operación distrital que articule al Distrito, la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) y la Brigada 13, así como el fortalecimiento del sistema de videovigilancia y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), incorporando tecnologías basadas en inteligencia artificial para mejorar la producción de información y la reacción oportuna frente a amenazas criminales. De igual manera, el Plan contempla el diseño e implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, conforme a la Ley 2199 de 2022, así como acciones orientadas a la actualización de la política pública antidrogas, prevención del consumo en menores de edad y desmantelamiento de redes delictivas que afectan a poblaciones vulnerables.

En este contexto, el fenómeno de la receptación —especialmente en lo relacionado con hurto de celulares, autopartes y bienes públicos— ya se encuentra incorporado como componente estratégico dentro de la política distrital de seguridad y justicia, bajo un enfoque integral de inteligencia, articulación interinstitucional, fortalecimiento tecnológico y coordinación metropolitana. Por lo anterior, el Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 no introduce una materia novedosa que carezca de desarrollo programático, sino que aborda una línea ya contemplada en el Plan de Desarrollo Distrital, cuya ejecución corresponde al Ejecutivo en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

¿GENERA GASTOS ADICIONALES?

El Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 afirma que “no genera ningún impacto fiscal adicional” y que únicamente traza una ruta dentro del plan de acción de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ejecutable con el presupuesto actual. Sin embargo, del contenido del articulado se desprenden obligaciones operativas concretas y recurrentes que, por su propia naturaleza, comprometen recursos humanos, logísticos y financieros, particularmente en cabeza de las Alcaldías Locales y de los sectores de seguridad y gobierno.

En efecto, el proyecto impone la realización de acciones de control con periodicidad mínima (operativos mensuales por línea de acción y acciones semanales en sectores priorizados), así como la obligación de disponer de recursos logísticos para los operativos (“transporte, carga de elementos y bodega para almacenaje”), y la elaboración y custodia de información y archivos actualizados de operativos de Inspección, Vigilancia y Control, además de la logística asociada a la conformación y funcionamiento de una mesa intersectorial local con sesiones mínimas trimestrales. Este conjunto de obligaciones puede implicar reasignación de personal, horas adicionales de trabajo, utilización de vehículos, contratación o disponibilidad de bodegas, e incluso costos asociados al almacenamiento temporal de elementos incautados o recuperados, lo cual desvirtúa, al menos prima facie, la afirmación de neutralidad fiscal.

Bajo el marco de responsabilidad fiscal, debe recordarse que el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 exige que todo proyecto normativo que ordene gasto o implique impacto fiscal identifique dicho impacto y señale la fuente de financiación, así como su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. En ese sentido, cuando un proyecto de acuerdo introduce obligaciones de ejecución periódica y logística, no basta con afirmar ausencia de

impacto; se requiere un soporte técnico mínimo que demuestre que las entidades y las Alcaldías Locales pueden atender esas cargas sin afectar sus compromisos misionales, metas, proyectos de inversión y presupuestos asignados.

Esta exigencia se torna particularmente relevante cuando el articulado involucra a las Alcaldías Locales, porque cualquier asignación de funciones u obligaciones operativas con incidencia en recursos humanos y presupuestales debe, además, armonizarse con lo dispuesto en el artículo 149 del Decreto Distrital 642 de 2025, que obliga a soportar la asignación o delegación de funciones en un estudio previo de capacidad institucional y de cargas de personal, así como en un análisis sobre recursos adicionales que puedan afectar los proyectos de inversión del respectivo Fondo de Desarrollo Local. En el proyecto no se advierte la existencia de estos soportes técnicos, pese a que se ordena expresamente que las Alcaldías Locales “dispondrán de los recursos necesarios” para la ejecución de operativos.

En consecuencia, desde la perspectiva fiscal y de sostenibilidad operativa, el proyecto presenta debilidades técnicas relevantes, al no acompañar la imposición de obligaciones recurrentes con un análisis que permita verificar su viabilidad financiera real, su coherencia con la planeación presupuestal y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con las capacidades instaladas de las entidades involucradas. Con todo, debe precisarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 457 del Decreto Distrital 642 de 2025, compilatorio del procedimiento previsto en el Decreto Distrital 438 de 2019, cuando del análisis jurídico se concluya falta de competencia para presentar, tramitar o aprobar la iniciativa, las entidades podrán prescindir del análisis presupuestal y técnico adicional. En este caso, dado que el reparo principal del proyecto es de competencia e iniciativa —al imponer cargas operativas específicas y crear una instancia administrativa de coordinación permanente—, las anteriores consideraciones fiscales se dejan consignadas a título de advertencia, sin que ello implique que la Administración esté obligada a profundizar en un estudio de impacto fiscal para emitir concepto de inviabilidad jurídica.

Atentamente,

CONCLUSIÓN

Del análisis integral del Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 se concluye que, si bien la finalidad de fortalecer las acciones contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano es legítima y se encuentra alineada con los fines constitucionales de seguridad y protección del patrimonio público y privado, así como con el Programa 8.3 del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” 2024–2027, el instrumento normativo propuesto presenta vicios sustanciales de competencia e iniciativa.


En particular, el articulado no se limita a establecer lineamientos generales, impersonales y abstractos, sino que impone cargas operativas específicas, periódicas y detalladas a entidades distritales y Alcaldías Locales, y dispone la creación de una instancia administrativa permanente con integración obligatoria, lo cual invade el ámbito funcional propio del Ejecutivo Distrital, en contravía de lo dispuesto en los artículos 13 y 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 315 de la Constitución Política y el artículo 149 del Decreto Distrital 642 de 2025.

Asimismo, el proyecto introduce obligaciones que pueden implicar impacto logístico y presupuestal sin contar con soporte técnico de capacidad institucional ni análisis de sostenibilidad fiscal, exigencias que deben observarse cuando se asignan funciones adicionales a las Alcaldías Locales o se estructuran nuevas instancias de coordinación.

En consecuencia, en los términos actualmente propuestos, el Proyecto de Acuerdo No. 016 de 2026 no es jurídicamente viable para primer debate, por presentar reparo sustancial de competencia e iniciativa. Sin perjuicio de lo anterior, el propósito de la iniciativa puede desarrollarse dentro del marco del Plan de Desarrollo Distrital vigente, a través de los instrumentos de gestión y coordinación propios del Ejecutivo Distrital, o mediante iniciativa del Alcalde Mayor si se estima necesaria una regulación adicional.

**EDUARDO ANDRÉS GARZÓN TORRES**

Subsecretario de Gestión Local

Elaboró: Jorge David Garavito – SGL 

Revisó: Katherine Hernández – SGL

Andrés Cárdenas – SGL



SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 06.02.2026 08:44:10
Al Contestar Cite este Nr: 2026EE04632901 Fol: 3 Anex: 1
ORIGEN: SUBD. ANALISIS Y SOSTENIBILIDAD PPTAL. /
JENNIFER LILIAN PABON MARTINEZ
DESTINO: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO / GUSTAVO
QUINTERO ARDILA / GUSTAVO QUINTERO ARDILA
ASUNTO: Oficio: 20261700026331. Solicitud de pronunciamiento
para primer debate Proyecto de Acuerdo 016 de 2026 - Radicado
SDH: 2026ER02607601 23/01/2026.
OBS: RADICACION VIRTUAL



Pública
211000 -24/5

Tipología documental: Concepto a Proyecto de Acuerdo o de Ley

Doctor
GUSTAVO QUINTERO ARDILA
Secretario de Despacho
Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 11 No. 8-17 Piso 2
radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co
Nit. 899999061
Ciudad

Asunto: Oficio: 20261700026331. Solicitud de pronunciamiento para primer debate
Proyecto de Acuerdo 016 de 2026 - Radicado SDH: 2026ER02607601
23/01/2026.

Apreciado doctor Quintero:

En respuesta a su comunicación del asunto, de manera atenta, me permito informar que, una vez efectuado el análisis del Proyecto de Acuerdo de asunto, se reitera el concepto negativo emitido a su antecedente considerando que las iniciativas guardan el mismo sentido y alcance, así:

Proyecto de Acuerdo	Antecedente	Título	Radicado de respuesta antecedente
016-2026	1018-2025 648-2025 502-2025 050-2025	<i>"Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá",</i>	2025EE897183O1 31/12/2025 2025EE618208O1 08/09/2025 2025EE384207O1 24/06/2025 2025EE071514O1 12/03/2025

www.haciendabogota.gov.co
Carrera 30 N.º 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311
PBX: (+57) 601 338 50 00 **Información:** Línea 195
NIT. 899.999.061-9



Concepto emitido
<p><i>“La Secretaría Jurídica Distrital, respecto a la iniciativa 050 de 2025 mediante radicado No. 2-2025-623 del 22/01/2025 cuyo texto es idéntico al ser presentado en el Proyecto de Acuerdo 502 de 2025 radicado No. 2-2025-5043 del 18/05/2025, reiteró el concepto de <u>no competencia</u> por parte del Concejo de Bogotá para presentar y aprobar la iniciativa, en los siguientes términos:</i></p> <p><i>“(…) es oportuno señalar que revisado el proyecto de acuerdo No. 050 de 2025, <u>se observa que guarda identidad en su exposición de motivos y articulado con las iniciativas No. 020, 234, 456 y 807 de 2024, sobre las cuales se pronunció la Secretaría Jurídica Distrital, sin que se hayan realizado modificaciones sustanciales que permitan cambiar el concepto emitido en su momento para la iniciativa 020 de 2024, y por lo tanto, se reitera el pronunciamiento contenido en el oficio radicado bajo el No. 2-2024-1232 del 30 de enero de 2024, del cual se adjunta copia a la presente comunicación.</u></i></p> <p><i>“(…) Se concluye que el Concejo Distrital NO tiene la competencia para dictar los contenidos del proyecto de acuerdo 020 de 2024, conforme lo expuesto a lo largo del presente documento, dado que, en la especificidad de los contornos que debería contener la estrategia de seguridad, es pretender co-administrar y desconocer la atribución del Alcalde Mayor de dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito. (Numeral 3 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993). (Subrayado fuera de texto).</i></p> <p><i>La Secretaría Distrital de Movilidad, respecto a la iniciativa 050 de 2025 radicado No. 202510001328641 del 17/02/2025 cuyo texto es idéntico al ser presentado en el Proyecto de Acuerdo 502 de 2025 indicó que el <u>Concejo no es competente</u> para presentar la iniciativa así:</i></p> <p><i>“Una vez revisado su contenido y las medidas propuestas, se observa la incorporación de algunos artículos que establecen medidas cuya competencia radica en el Alcalde Mayor de Bogotá, conforme a las funciones previstas en el artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y el Acuerdo Distrital No. 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”</i></p> <p><i>(…) en razón a que el análisis jurídico concluyó la falta de competencia del Concejo Distrital para presentar la iniciativa, se prescinde del análisis técnico y presupuestal.”</i></p> <p><i>Por lo anterior y dado que la iniciativa no presenta modificaciones respecto a su antecedente, el Proyecto de Acuerdo 050 de 2025 y no se cuentan con los comentarios del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia (Coordinador), se reitera el concepto emitido por esta Secretaría mediante radicado 2025EE07151401 del 12/03/2025”</i></p>

La iniciativa 016 de 2026, no presenta modificación respecto de sus antecedentes, las propuestas 1018, 648, 502 y 050 de 2025.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta los comentarios emitidos por el sector coordinador en relación con sus antecedentes, se reitera el concepto emitido por esta Secretaría, el cual se encuentra relacionado en el cuadro anterior, en el entendido de que se mantiene la opinión previamente expresada.

En todo caso se debe precisar, que las entidades en cumplimiento de los principios presupuestales contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996, solo podrán viabilizar iniciativas que puedan ser debidamente financiadas con el presupuesto aprobado en la presente vigencia fiscal, estén previstas dentro de las

Pública

3

proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo y no afecten las metas de superávit primario del Distrito Capital.

Cordialmente,

JENNIFER
LILIAN PABON
MARTINEZ

Firmado
digitalmente por
JENNIFER LILIAN
PABON MARTINEZ

Jennifer Lilián Pabón Martínez
Subdirectora Técnica
Subdirección de Análisis y Sostenibilidad Presupuestal

Anexos: 1 archivo PDF

Proyectado por: Liv Somer Ochoa Hernández – Profesional Universitario SASP



Pública
211000 -24/5

Tipología documental: Concepto a Proyecto de Acuerdo o de Ley

Doctor
GUSTAVO QUINTERO ARDILA
Secretario de Despacho
Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 11 No. 8-17 Piso 2
radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co
Nit. 899999061
Ciudad

Asunto: Oficio: 20251700535781. Solicitud de pronunciamiento para primer debate
Proyecto de Acuerdo 1018 de 2025 - Radicado SDH: 2025ER319817O1
02/12/2025.

Apreciado doctor Quintero:

En respuesta a su comunicación del asunto, de manera atenta, me permito informar que, una vez efectuado el análisis del Proyecto de Acuerdo de asunto, se reitera el concepto negativo emitido a su antecedente considerando que las iniciativas guardan el mismo sentido y alcance, así:

Proyecto de Acuerdo	Antecedente	Título	Radicado de respuesta antecedente	Concepto emitido
1018-2025	648-2025 502-2025	"Por medio del cual se crea la estrategia contra la receptación de autopartes, celulares y mobiliario urbano en Bogotá",	2025EE618208O1 08/09/2025 2025EE384207O1 24/06/2025	<p>"La Secretaría Jurídica Distrital, respecto a la iniciativa 050 de 2025 mediante radicado No. 2-2025-623 del 22/01/2025 cuyo texto es idéntico al ser presentado en el Proyecto de Acuerdo 502 de 2025 radicado No. 2-2025-5043 del 18/05/2025, reiteró el concepto de <u>no competencia</u> por parte del Concejo de Bogotá para presentar y aprobar la iniciativa, en los siguientes términos:</p> <p>"(...) es oportuno señalar que revisado el proyecto de acuerdo No. 050 de 2025, <u>se observa que guarda identidad en su exposición de motivos y articulado con las iniciativas No. 020, 234, 456 y 807 de 2024, sobre las cuales se pronunció la Secretaría Jurídica Distrital, sin que se hayan realizado modificaciones sustanciales que permitan cambiar el concepto emitido en su momento para la iniciativa 020 de 2024, y por lo tanto, <u>se reitera el pronunciamiento contenido en el oficio radicado bajo el No. 2-2024-1232 del 30 de enero de 2024, del cual se adjunta copia a la presente comunicación.</u></u></p>

Proyecto de Acuerdo	Antecedente	Título	Radicado de respuesta antecedente	Concepto emitido
				<p><i>"(...) Se concluye que el Concejo Distrital <u>NO</u> tiene la competencia para dictar los contenidos del proyecto de acuerdo 020 de 2024, conforme lo expuesto a lo largo del presente documento, dado que, en la especificidad de los contornos que debería contener la estrategia de seguridad, es pretender co-administrar y desconocer la atribución del Alcalde Mayor de dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito. (Numeral 3 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993). (Subrayado fuera de texto).</i></p> <p><i>La Secretaría Distrital de Movilidad, respecto a la iniciativa 050 de 2025 radicado No. 202510001328641 del 17/02/2025 cuyo texto es idéntico al ser presentado en el Proyecto de Acuerdo 502 de 2025 indicó que el <u>Concejo no es competente</u> para presentar la iniciativa así:</i></p> <p><i>"Una vez revisado su contenido y las medidas propuestas, se observa la incorporación de algunos artículos que establecen medidas cuya competencia radica en el Alcalde Mayor de Bogotá, conforme a las funciones previstas en el artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y el Acuerdo Distrital No. 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones"</i></p> <p><i>(...) en razón a que el análisis jurídico concluyó la falta de competencia del Concejo Distrital para presentar la iniciativa, se prescinde del análisis técnico y presupuestal."</i></p> <p><i>Por lo anterior y dado que la iniciativa no presenta modificaciones respecto a su antecedente, el Proyecto de Acuerdo 050 de 2025 y no se cuentan con los comentarios del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia (Coordinador), se reitera el concepto emitido por esta Secretaría mediante radicado 2025EE071514O1 del 12/03/2025"</i></p> <p><i>(...)</i></p>

Proyecto de Acuerdo	Antecedente	Título	Radicado de respuesta antecedente	Concepto emitido
				<p>La iniciativa 648 de 2025, no presenta modificación respecto de sus antecedentes, la propuesta 050 y 502 de 2025.</p> <p>La Secretaría Jurídica Distrital se pronunció mediante oficio con radicado 2-2025-9238 del 11 de agosto de 2025, reiterando los conceptos ya emitidos así:</p> <p>“...es oportuno señalar que revisado el proyecto de acuerdo No.649 de 2025, se observa que guarda identidad en su exposición de motivos y articulado con las iniciativas de los proyectos de acuerdo 001, 216, 438 y 789 del 2024, y 052 y 504 del 2025 sobre la cual se pronunció la Secretaría Jurídica Distrital, sin que en la actual iniciativa se hayan realizado modificaciones sustanciales que permitan cambiar el concepto emitido, por lo tanto, se reitera el pronunciamiento contenido en el oficio radicado bajo el No 2-2024-1307 del 30 de enero de 2024”</p>

La iniciativa 1018 de 2025, no presenta modificación respecto de sus antecedentes, las propuestas 648, 502 y 050 de 2025.

La Secretaría Jurídica Distrital se pronunció mediante oficio con radicado 2-2025-16445 del 09 de diciembre de 2025, reiterando los conceptos ya emitidos así:

“Una vez analizada la iniciativa presentada, se estableció que su estructura y contenido guarda identidad con el proyecto de acuerdo 648 de 2025, del que este sector ha emitido pronunciamiento con el radicado 2-2025-9474 del 14 de agosto de 2025. En ese sentido, se ratifican dichos comentarios que por este escrito se adjuntan.

Precisamente, el proyecto del asunto deriva de una solicitud de desarchivo del proyecto de acuerdo 648 de 2025, en los términos del parágrafo del artículo 79 del Acuerdo 741 de 2019, modificado por el artículo 41 del Acuerdo 1014 de 2025, que señala:

“(...) Parágrafo. Los proyectos de acuerdo archivados al término de un periodo de sesiones ordinarias por no ser discutidos en primer debate, se entenderán presentados en el (los) siguiente(s) periodo(s), de la respectiva vigencia anual, mediante solicitud escrita dirigida a la Secretaría General por parte del autor principal. Al proyecto no se le podrá modificar el articulado original y conservará los mismos ponentes, salvo renuncia expresa impedimento.

Recibida la solicitud, la Secretaría General adelantará el trámite interno para el desarchivo del expediente, lo publicará en la red interna y en los anales del Concejo, y lo remitirá a la Comisión de origen para su reanudación. Una vez remitido el proyecto a la comisión y

Pública

4

comunicado a los ponentes, estos podrán solicitar el desarchivo de la ponencia o rendirla en los términos del artículo 71 del presente reglamento.””

Teniendo en cuenta que no se tiene el concepto del sector coordinador, se reitera el concepto emitido por esta Secretaría mediante radicado 2025EE618208O1 del 08/09/2025, sobre el Proyecto de Acuerdo 648 de 2025 (antecedente).

En todo caso se debe precisar, que las entidades en cumplimiento de los principios presupuestales contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996, solo podrán viabilizar iniciativas que puedan ser debidamente financiadas con el presupuesto aprobado en la presente vigencia fiscal, estén previstas dentro de las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo y no afecten las metas de superávit primario del Distrito Capital.

Cordialmente,

JENNIFER
LILIAN PABON
MARTINEZ
Jennifer Lilian Pabón Martínez
Subdirectora Técnica
Subdirección de Análisis y Sostenibilidad Presupuestal

Firmado
digitalmente por
JENNIFER LILIAN
PABON MARTINEZ

Anexos: 1 archivo PDF

Proyectado por: Liv Somer Ochoa Hernández – Profesional Universitario SASP